

Del Campo a la ciudad: Transformación de los escenarios de conflicto en Colombia*

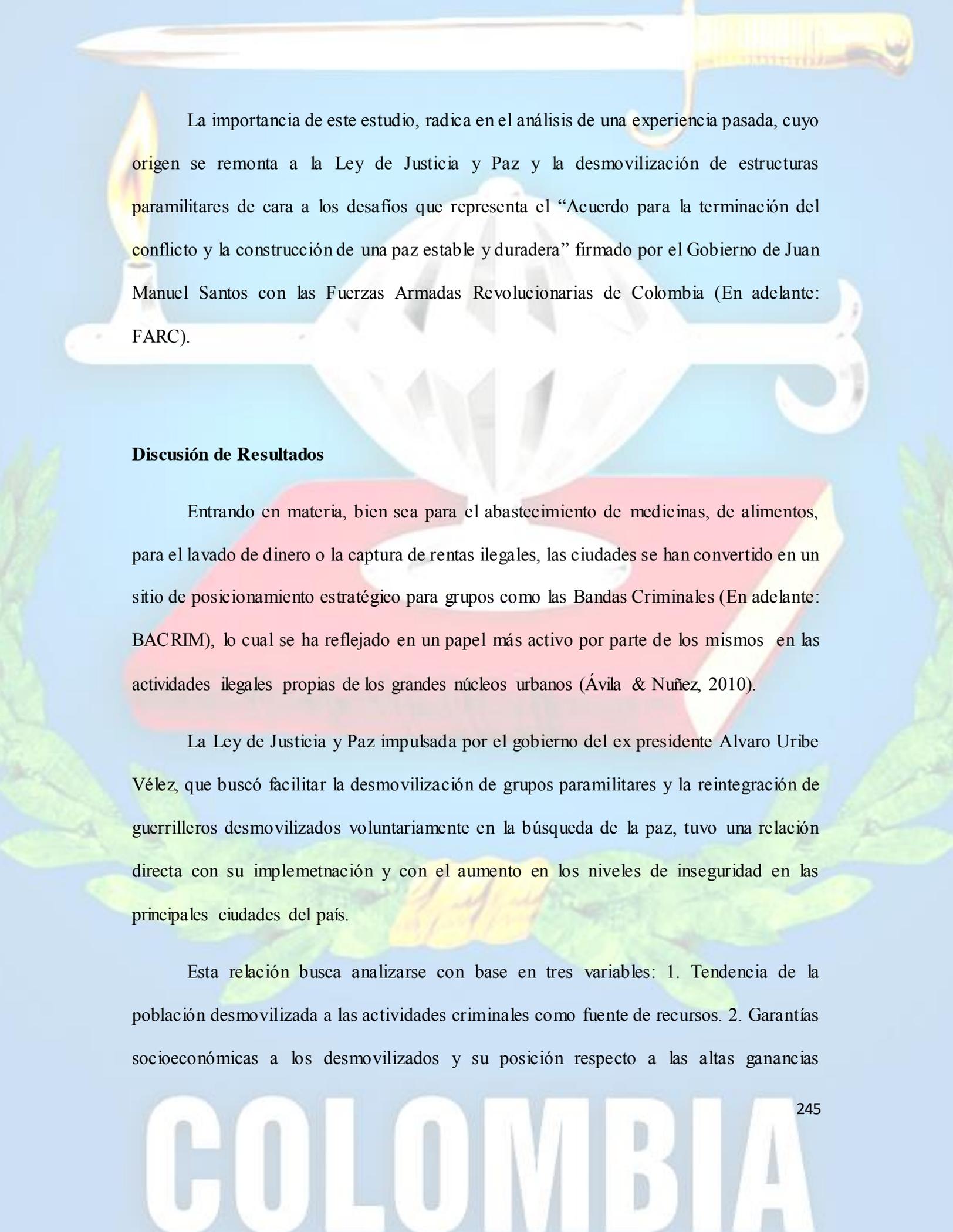
Felipe Barrera Herrera *

Introducción

En la actualidad, Colombia está atravesando por un proceso de transición en muchos sentidos. Los desafíos políticos, los cambios sociales y las nuevas dinámicas en torno al posconflicto son algunos de los temas que más preocupan al país. En este sentido, si bien las líneas de estudio son significativamente amplias, en este ejercicio académico se estudiará el proceso de transición del conflicto en Colombia de un espacio rural a las lógicas urbanas. A lo largo del documento, se podrá observar cómo el conflicto ha venido pasando del campo a la ciudad producto de los procesos de reinserción, y a su vez, cómo las garantías de tipo socio-económico, enmarcadas en políticas de reinserción óptimas con oportunidades de empleo y de progreso se convierten, acompañadas de la acción de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de sus capacidades, en mecanismos óptimos para evitar el escalonamiento del conflicto.

* Esta ponencia es resultado del proyecto de investigación titulado: “Desafíos y nuevos escenarios de la seguridad multidimensional en el contexto nacional, regional y hemisférico en el decenio 2015-2025”, vinculado al Grupo de Investigación Centro de Gravedad, de la maestría en Seguridad y Defensa para optar por el título de magíster en Seguridad y Defensa Nacionales. Escuela Superior de Guerra.

* Politólogo de la Universidad del Rosario y estudiante de Jurisprudencia de la misma Universidad, Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEGUE). Actualmente se desempeña como investigador del Departamento Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la ESDEGUE. Es integrante del grupo de investigación Centro de Gravedad y trabaja en el proyecto de investigación “Desafíos nuevos escenarios de la seguridad multidimensional en el contexto nacional, regional y hemisférico en el decenio 2015 – 2025”, particularmente en la línea “Convergencia de la seguridad: terrorismo y delincuencia organizada”



La importancia de este estudio, radica en el análisis de una experiencia pasada, cuyo origen se remonta a la Ley de Justicia y Paz y la desmovilización de estructuras paramilitares de cara a los desafíos que representa el “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (En adelante: FARC).

Discusión de Resultados

Entrando en materia, bien sea para el abastecimiento de medicinas, de alimentos, para el lavado de dinero o la captura de rentas ilegales, las ciudades se han convertido en un sitio de posicionamiento estratégico para grupos como las Bandas Criminales (En adelante: BACRIM), lo cual se ha reflejado en un papel más activo por parte de los mismos en las actividades ilegales propias de los grandes núcleos urbanos (Ávila & Nuñez, 2010).

La Ley de Justicia y Paz impulsada por el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe Vélez, que buscó facilitar la desmovilización de grupos paramilitares y la reintegración de guerrilleros desmovilizados voluntariamente en la búsqueda de la paz, tuvo una relación directa con su implementación y con el aumento en los niveles de inseguridad en las principales ciudades del país.

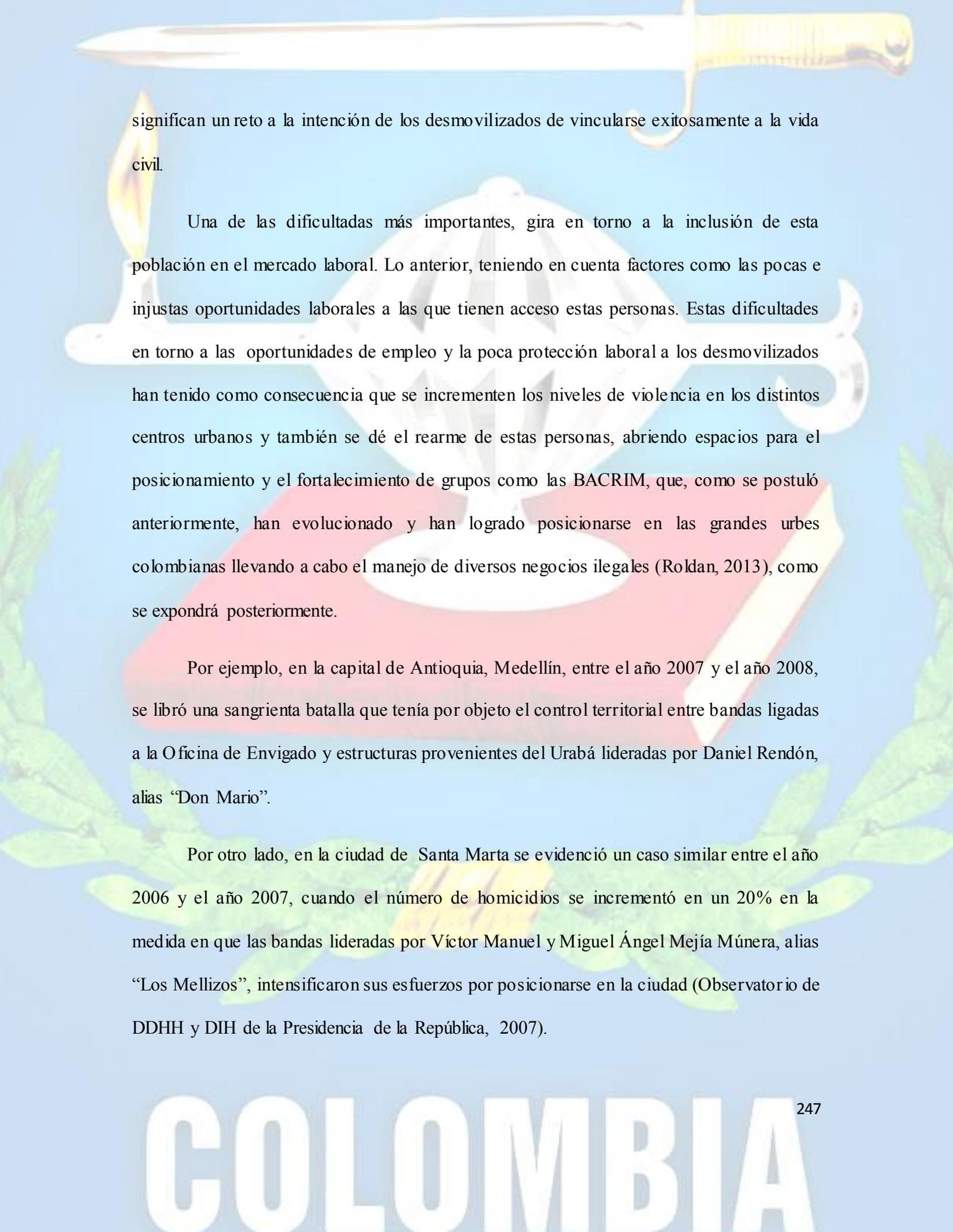
Esta relación busca analizarse con base en tres variables: 1. Tendencia de la población desmovilizada a las actividades criminales como fuente de recursos. 2. Garantías socioeconómicas a los desmovilizados y su posición respecto a las altas ganancias

producto de la criminalidad y 3. El surgimiento de nuevas actividades criminales basadas en el trabajo en red (redes criminales^{§§§§§}) propias de las BACRIM.

De acuerdo a las cifras de participación de desmovilizados en actividades criminales de distintas agencias y entidades, se puede determinar que no hay una unidad de criterio en torno a la ello. Para octubre del año 2009 el Alto Comisionado para la reintegración, Frank Pearl, sostenía que el 7.2% de los desmovilizados habían incurrido en actividades ilegales, sin embargo, nunca se evidenció coherencia entre las cifras del Alto Comisionado, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (En adelante: CNRR) y las de la Policía Nacional. Mientras el comisionado hablaba de cifras que no superaban el 10% que participaban en actos delictivos, la CNRR estimaba un 15.5%. Por su parte la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dijin) preveía un total de 11.72% (Nussio, Negrete & Ugarriza, 2011).

La realidad, es que más allá de una homogeneidad en tono a la participación de población desmovilizada en actividades criminales, hay situaciones que han llevado a esta población a recaer en este tipo de acciones, estas situaciones muchas veces son factores externos, ajenos a la persona, que por fallas estructurales y ausencia de garantías se convierten blanco fácil para organizaciones criminales de un nuevo orden, que han evolucionado y han extendido sus redes y su objeto e negocio, lo cual las hace atractivas para mano de obra calificada para el crimen. Según Enzo Nussio (2012), estas situaciones

§§§§§ La estructura interna de las grandes organizaciones criminales ha cambiado de forma radical en los últimos 50 años, cada vez es más complicado encontrar a grupos criminales que tengan una estructura vertical, que sólo operen en una región o que se dediquen en exclusiva a una actividad criminal, por el contrario lo que encontramos son estructuras muy complejas, hoy los grupos criminales comparten riesgos, se dividen las tareas y generan esquemas dinámicos de alianzas que se pueden reconfigurar en cualquier momento (Sánchez, SF, p.1).

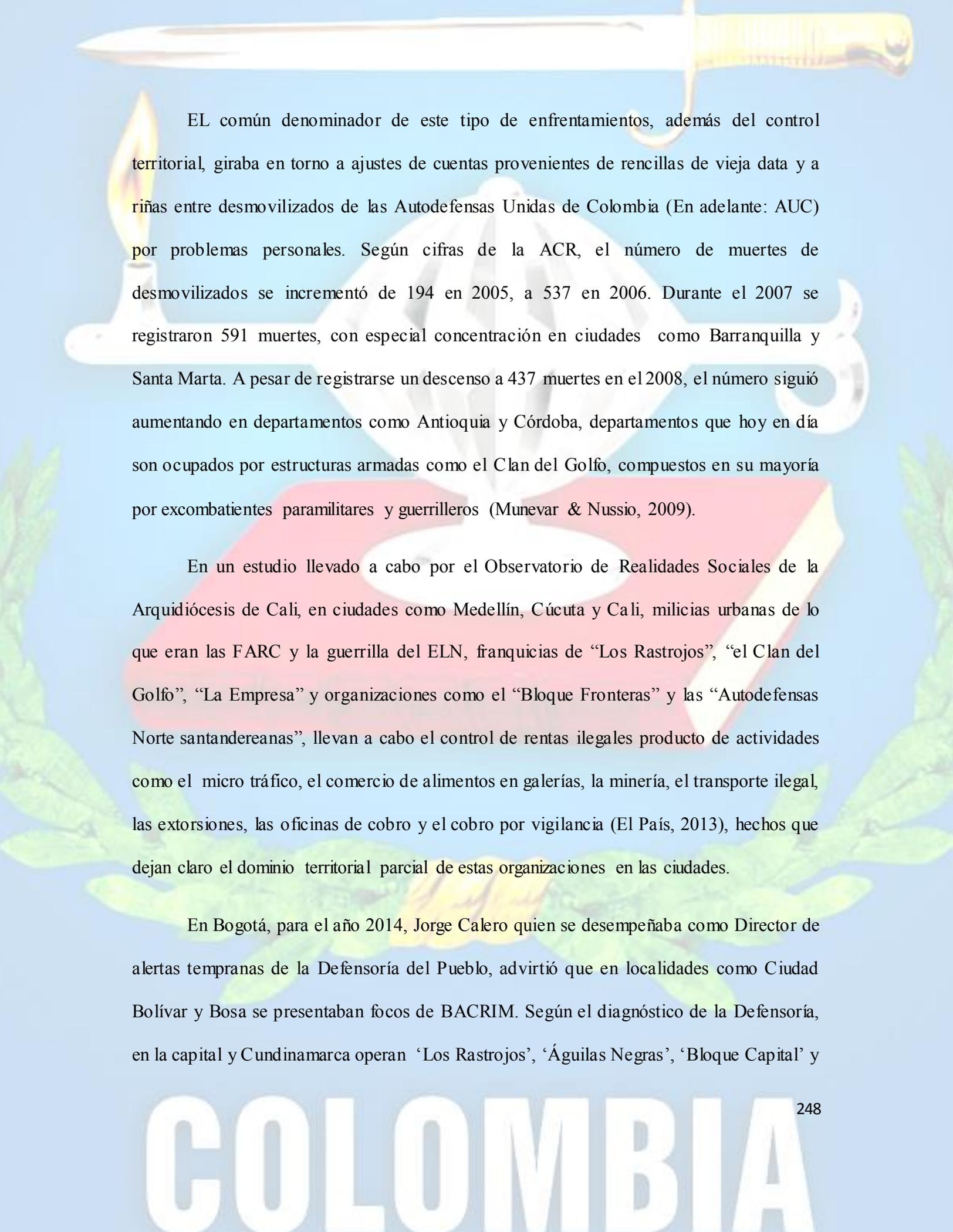


significan un reto a la intención de los desmovilizados de vincularse exitosamente a la vida civil.

Una de las dificultades más importantes, gira en torno a la inclusión de esta población en el mercado laboral. Lo anterior, teniendo en cuenta factores como las pocas e injustas oportunidades laborales a las que tienen acceso estas personas. Estas dificultades en torno a las oportunidades de empleo y la poca protección laboral a los desmovilizados han tenido como consecuencia que se incrementen los niveles de violencia en los distintos centros urbanos y también se dé el rearme de estas personas, abriendo espacios para el posicionamiento y el fortalecimiento de grupos como las BACRIM, que, como se postuló anteriormente, han evolucionado y han logrado posicionarse en las grandes urbes colombianas llevando a cabo el manejo de diversos negocios ilegales (Roldan, 2013), como se expondrá posteriormente.

Por ejemplo, en la capital de Antioquia, Medellín, entre el año 2007 y el año 2008, se libró una sangrienta batalla que tenía por objeto el control territorial entre bandas ligadas a la Oficina de Envigado y estructuras provenientes del Urabá lideradas por Daniel Rendón, alias “Don Mario”.

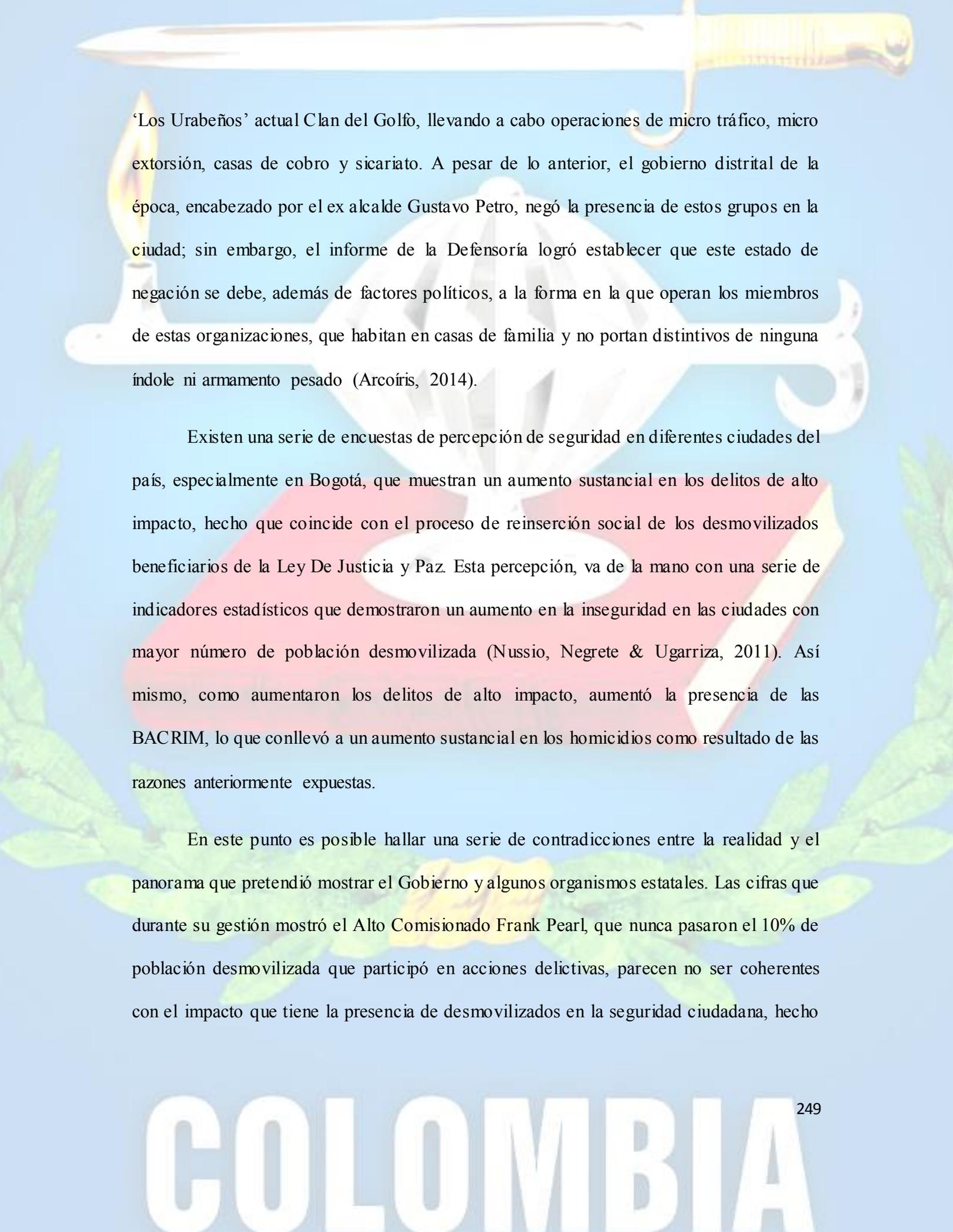
Por otro lado, en la ciudad de Santa Marta se evidenció un caso similar entre el año 2006 y el año 2007, cuando el número de homicidios se incrementó en un 20% en la medida en que las bandas lideradas por Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “Los Mellizos”, intensificaron sus esfuerzos por posicionarse en la ciudad (Observatorio de DDHH y DIH de la Presidencia de la República, 2007).



EL común denominador de este tipo de enfrentamientos, además del control territorial, giraba en torno a ajustes de cuentas provenientes de rencillas de vieja data y a riñas entre desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (En adelante: AUC) por problemas personales. Según cifras de la ACR, el número de muertes de desmovilizados se incrementó de 194 en 2005, a 537 en 2006. Durante el 2007 se registraron 591 muertes, con especial concentración en ciudades como Barranquilla y Santa Marta. A pesar de registrarse un descenso a 437 muertes en el 2008, el número siguió aumentando en departamentos como Antioquia y Córdoba, departamentos que hoy en día son ocupados por estructuras armadas como el Clan del Golfo, compuestos en su mayoría por excombatientes paramilitares y guerrilleros (Munevar & Nussio, 2009).

En un estudio llevado a cabo por el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, en ciudades como Medellín, Cúcuta y Cali, milicias urbanas de lo que eran las FARC y la guerrilla del ELN, franquicias de “Los Rastrojos”, “el Clan del Golfo”, “La Empresa” y organizaciones como el “Bloque Fronteras” y las “Autodefensas Norte santandereanas”, llevan a cabo el control de rentas ilegales producto de actividades como el micro tráfico, el comercio de alimentos en galerías, la minería, el transporte ilegal, las extorsiones, las oficinas de cobro y el cobro por vigilancia (El País, 2013), hechos que dejan claro el dominio territorial parcial de estas organizaciones en las ciudades.

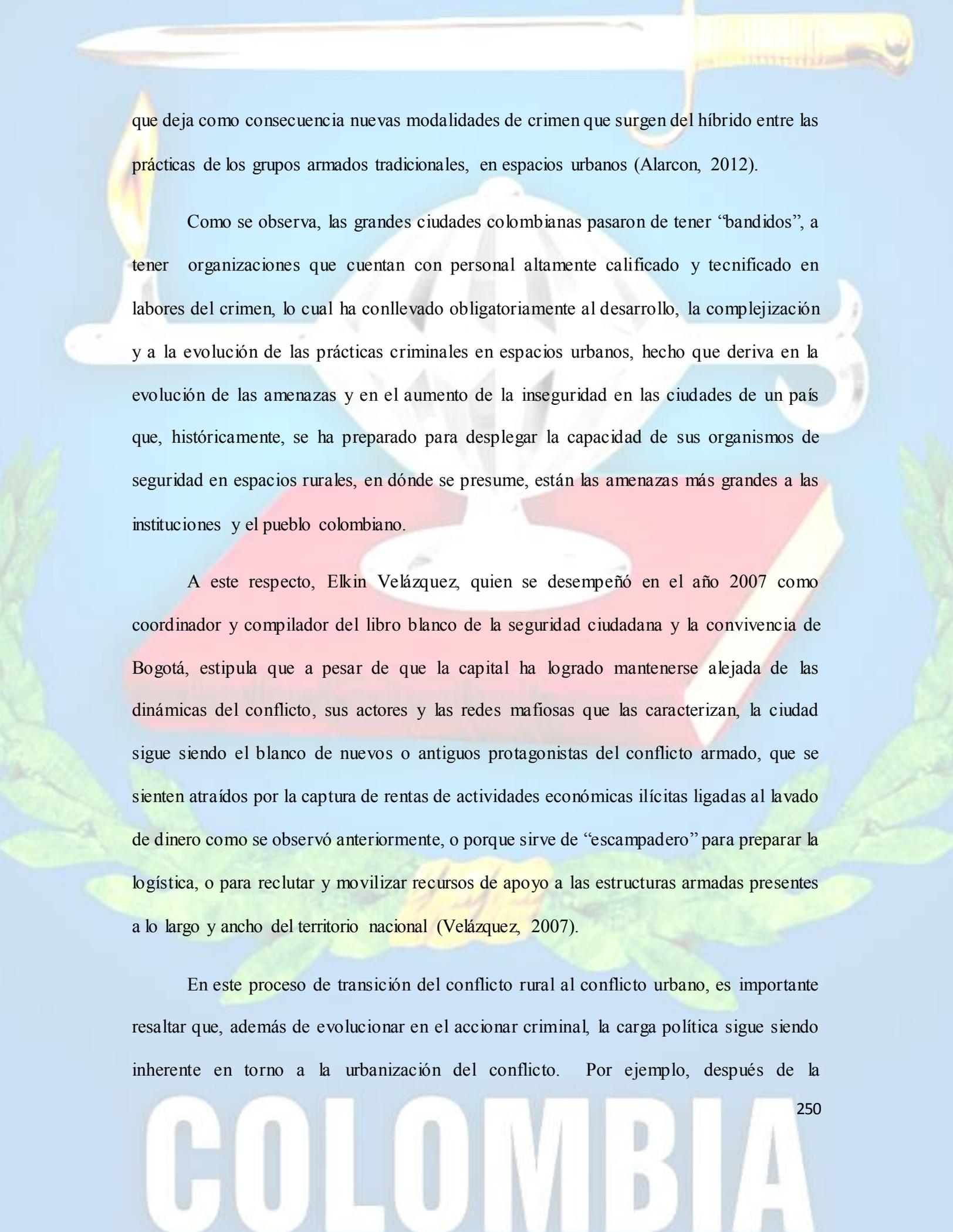
En Bogotá, para el año 2014, Jorge Calero quien se desempeñaba como Director de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, advirtió que en localidades como Ciudad Bolívar y Bosa se presentaban focos de BACRIM. Según el diagnóstico de la Defensoría, en la capital y Cundinamarca operan ‘Los Rastrojos’, ‘Águilas Negras’, ‘Bloque Capital’ y



‘Los Urabeños’ actual Clan del Golfo, llevando a cabo operaciones de micro tráfico, micro extorsión, casas de cobro y sicariato. A pesar de lo anterior, el gobierno distrital de la época, encabezado por el ex alcalde Gustavo Petro, negó la presencia de estos grupos en la ciudad; sin embargo, el informe de la Defensoría logró establecer que este estado de negación se debe, además de factores políticos, a la forma en la que operan los miembros de estas organizaciones, que habitan en casas de familia y no portan distintivos de ninguna índole ni armamento pesado (Arcoíris, 2014).

Existen una serie de encuestas de percepción de seguridad en diferentes ciudades del país, especialmente en Bogotá, que muestran un aumento sustancial en los delitos de alto impacto, hecho que coincide con el proceso de reinserción social de los desmovilizados beneficiarios de la Ley De Justicia y Paz. Esta percepción, va de la mano con una serie de indicadores estadísticos que demostraron un aumento en la inseguridad en las ciudades con mayor número de población desmovilizada (Nussio, Negrete & Ugarriza, 2011). Así mismo, como aumentaron los delitos de alto impacto, aumentó la presencia de las BACRIM, lo que conllevó a un aumento sustancial en los homicidios como resultado de las razones anteriormente expuestas.

En este punto es posible hallar una serie de contradicciones entre la realidad y el panorama que pretendió mostrar el Gobierno y algunos organismos estatales. Las cifras que durante su gestión mostró el Alto Comisionado Frank Pearl, que nunca pasaron el 10% de población desmovilizada que participó en acciones delictivas, parecen no ser coherentes con el impacto que tiene la presencia de desmovilizados en la seguridad ciudadana, hecho

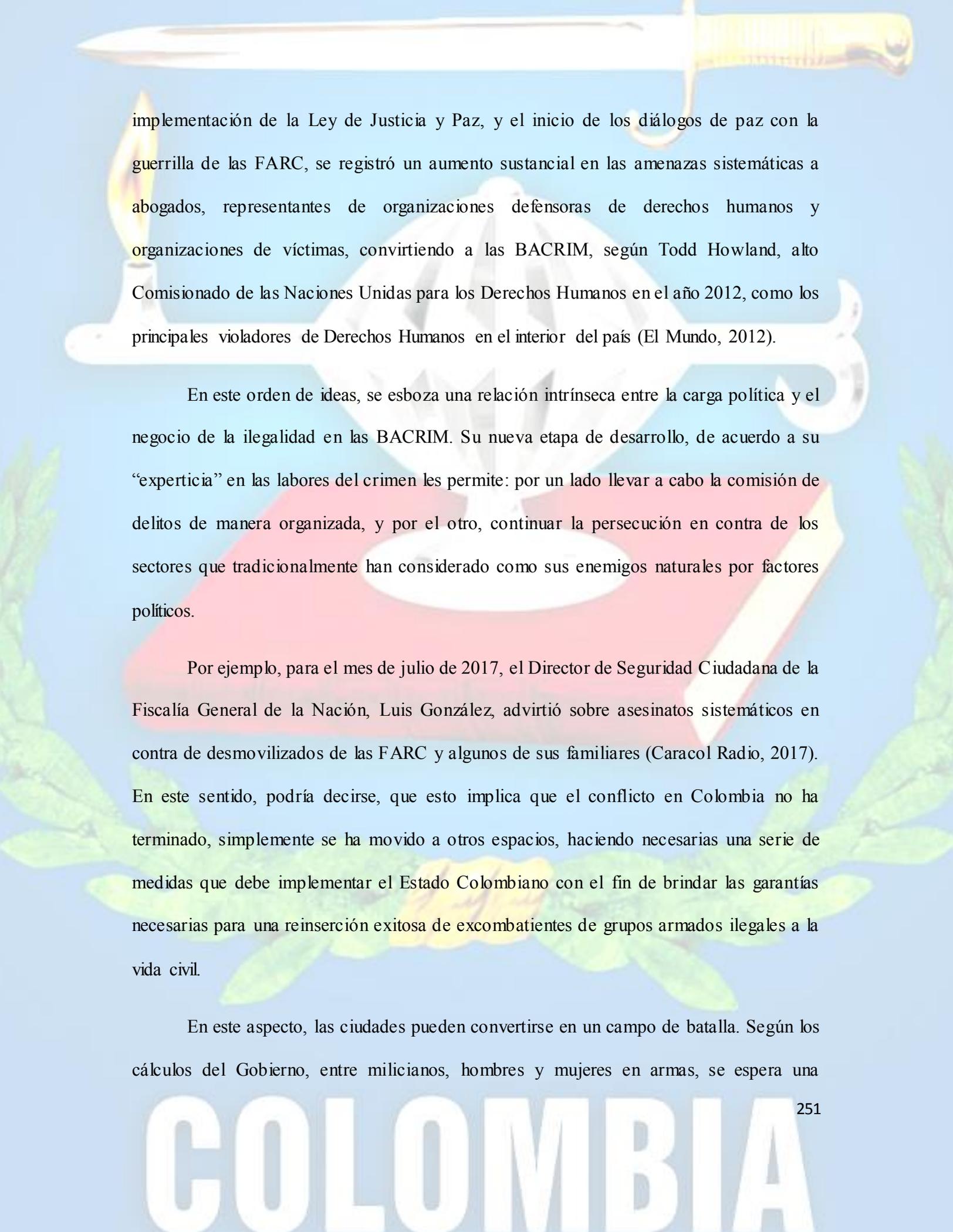


que deja como consecuencia nuevas modalidades de crimen que surgen del híbrido entre las prácticas de los grupos armados tradicionales, en espacios urbanos (Alarcon, 2012).

Como se observa, las grandes ciudades colombianas pasaron de tener “bandidos”, a tener organizaciones que cuentan con personal altamente calificado y tecnificado en labores del crimen, lo cual ha conllevado obligatoriamente al desarrollo, la complejización y a la evolución de las prácticas criminales en espacios urbanos, hecho que deriva en la evolución de las amenazas y en el aumento de la inseguridad en las ciudades de un país que, históricamente, se ha preparado para desplegar la capacidad de sus organismos de seguridad en espacios rurales, en dónde se presume, están las amenazas más grandes a las instituciones y el pueblo colombiano.

A este respecto, Elkin Velázquez, quien se desempeñó en el año 2007 como coordinador y compilador del libro blanco de la seguridad ciudadana y la convivencia de Bogotá, estipula que a pesar de que la capital ha logrado mantenerse alejada de las dinámicas del conflicto, sus actores y las redes mafiosas que las caracterizan, la ciudad sigue siendo el blanco de nuevos o antiguos protagonistas del conflicto armado, que se sienten atraídos por la captura de rentas de actividades económicas ilícitas ligadas al lavado de dinero como se observó anteriormente, o porque sirve de “escampadero” para preparar la logística, o para reclutar y movilizar recursos de apoyo a las estructuras armadas presentes a lo largo y ancho del territorio nacional (Velázquez, 2007).

En este proceso de transición del conflicto rural al conflicto urbano, es importante resaltar que, además de evolucionar en el accionar criminal, la carga política sigue siendo inherente en torno a la urbanización del conflicto. Por ejemplo, después de la

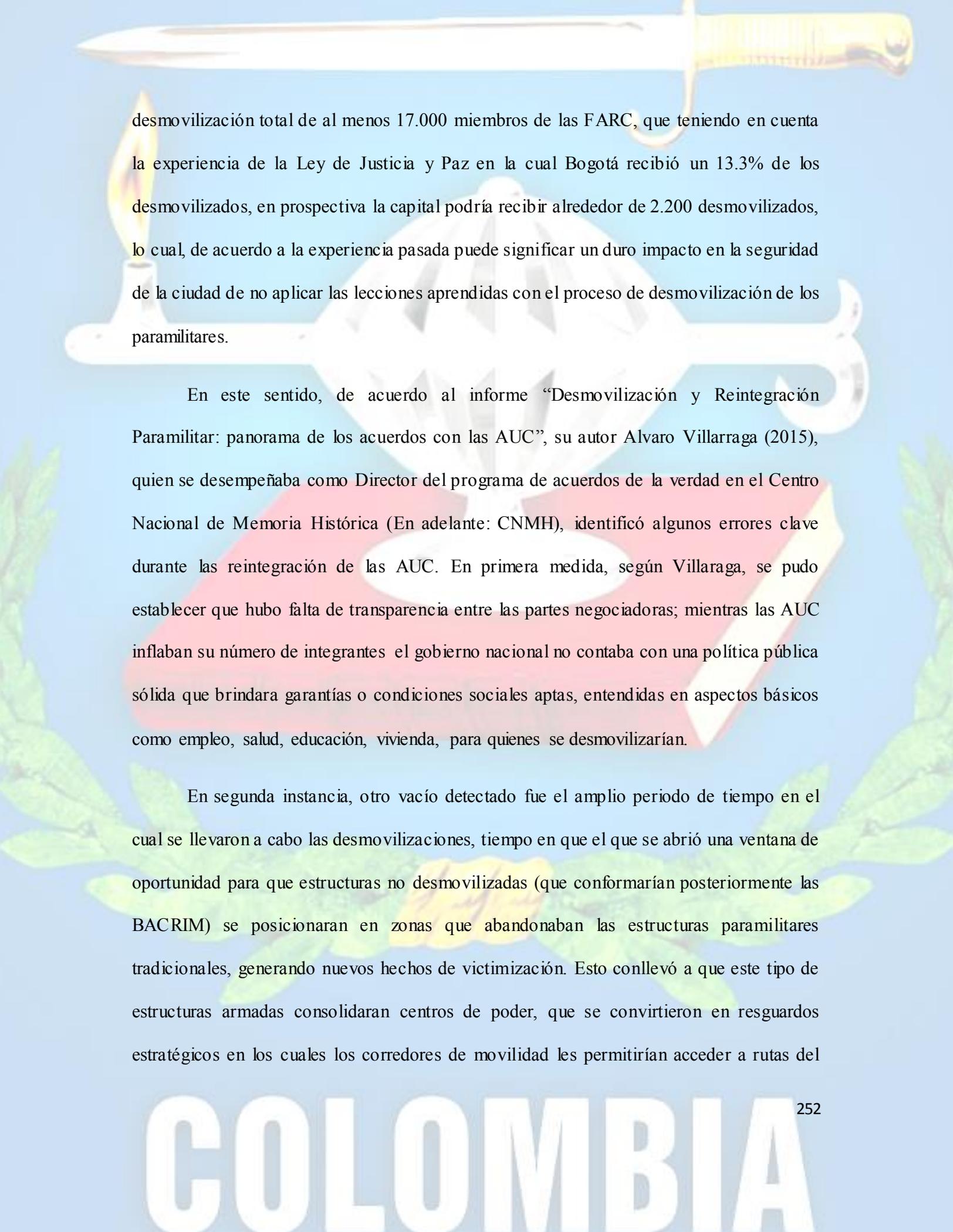


implementación de la Ley de Justicia y Paz, y el inicio de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, se registró un aumento sustancial en las amenazas sistemáticas a abogados, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones de víctimas, convirtiendo a las BACRIM, según Todd Howland, alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2012, como los principales violadores de Derechos Humanos en el interior del país (El Mundo, 2012).

En este orden de ideas, se esboza una relación intrínseca entre la carga política y el negocio de la ilegalidad en las BACRIM. Su nueva etapa de desarrollo, de acuerdo a su “experticia” en las labores del crimen les permite: por un lado llevar a cabo la comisión de delitos de manera organizada, y por el otro, continuar la persecución en contra de los sectores que tradicionalmente han considerado como sus enemigos naturales por factores políticos.

Por ejemplo, para el mes de julio de 2017, el Director de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, Luis González, advirtió sobre asesinatos sistemáticos en contra de desmovilizados de las FARC y algunos de sus familiares (Caracol Radio, 2017). En este sentido, podría decirse, que esto implica que el conflicto en Colombia no ha terminado, simplemente se ha movido a otros espacios, haciendo necesarias una serie de medidas que debe implementar el Estado Colombiano con el fin de brindar las garantías necesarias para una reinserción exitosa de excombatientes de grupos armados ilegales a la vida civil.

En este aspecto, las ciudades pueden convertirse en un campo de batalla. Según los cálculos del Gobierno, entre milicianos, hombres y mujeres en armas, se espera una



desmovilización total de al menos 17.000 miembros de las FARC, que teniendo en cuenta la experiencia de la Ley de Justicia y Paz en la cual Bogotá recibió un 13.3% de los desmovilizados, en prospectiva la capital podría recibir alrededor de 2.200 desmovilizados, lo cual, de acuerdo a la experiencia pasada puede significar un duro impacto en la seguridad de la ciudad de no aplicar las lecciones aprendidas con el proceso de desmovilización de los paramilitares.

En este sentido, de acuerdo al informe “Desmovilización y Reintegración Paramilitar: panorama de los acuerdos con las AUC”, su autor Alvaro Villarraga (2015), quien se desempeñaba como Director del programa de acuerdos de la verdad en el Centro Nacional de Memoria Histórica (En adelante: CNMH), identificó algunos errores clave durante las reintegración de las AUC. En primera medida, según Villarraga, se pudo establecer que hubo falta de transparencia entre las partes negociadoras; mientras las AUC inflaban su número de integrantes el gobierno nacional no contaba con una política pública sólida que brindara garantías o condiciones sociales aptas, entendidas en aspectos básicos como empleo, salud, educación, vivienda, para quienes se desmovilizarían.

En segunda instancia, otro vacío detectado fue el amplio periodo de tiempo en el cual se llevaron a cabo las desmovilizaciones, tiempo en que el que se abrió una ventana de oportunidad para que estructuras no desmovilizadas (que conformarían posteriormente las BACRIM) se posicionaran en zonas que abandonaban las estructuras paramilitares tradicionales, generando nuevos hechos de victimización. Esto conllevó a que este tipo de estructuras armadas consolidaran centros de poder, que se convirtieron en resguardos estratégicos en los cuales los corredores de movilidad les permitirían acceder a rutas del

narcotráfico (y otras economías ilegales) y moverse fácilmente para escapar de las autoridades.

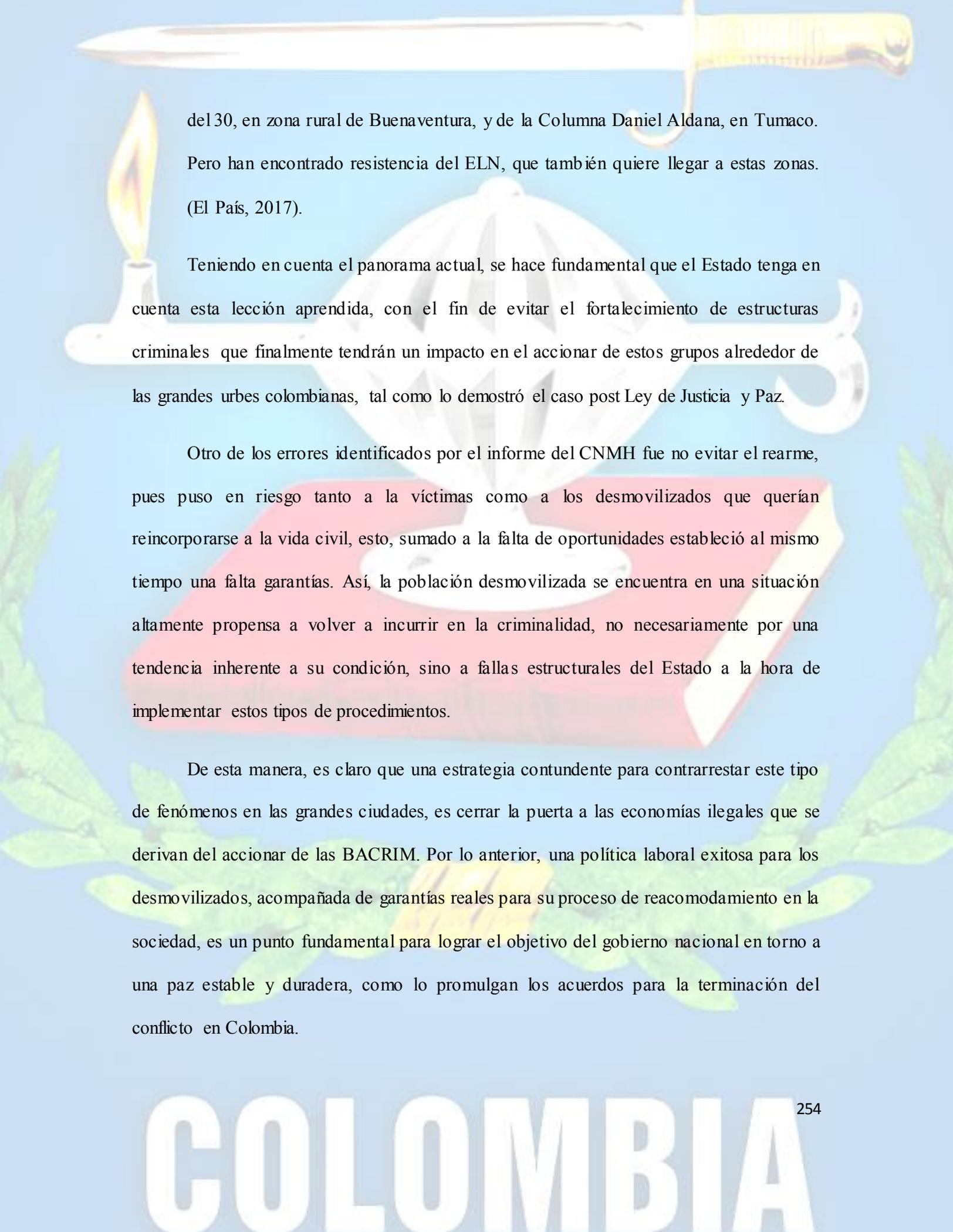


Fuente: El País.

Como se puede observar en esta gráfica, el Clan del Golfo, que surgió como resultado de estos vacíos detectados y actualmente es una de las amenazas más grandes a la seguridad nacional, tiene influencia en 21 departamentos del país y, de acuerdo con la Fundación Indepaz, su accionar afecta a 279 municipios.

Según fuentes de inteligencia de la Policía Nacional:

Su intención es llegar a zonas antes controladas por las Farc. Quieren copar los espacios del Frente 58, en el Golfo de Morrosquillo; Frente 34, en el Bajo Baudó;



del 30, en zona rural de Buenaventura, y de la Columna Daniel Aldana, en Tumaco.

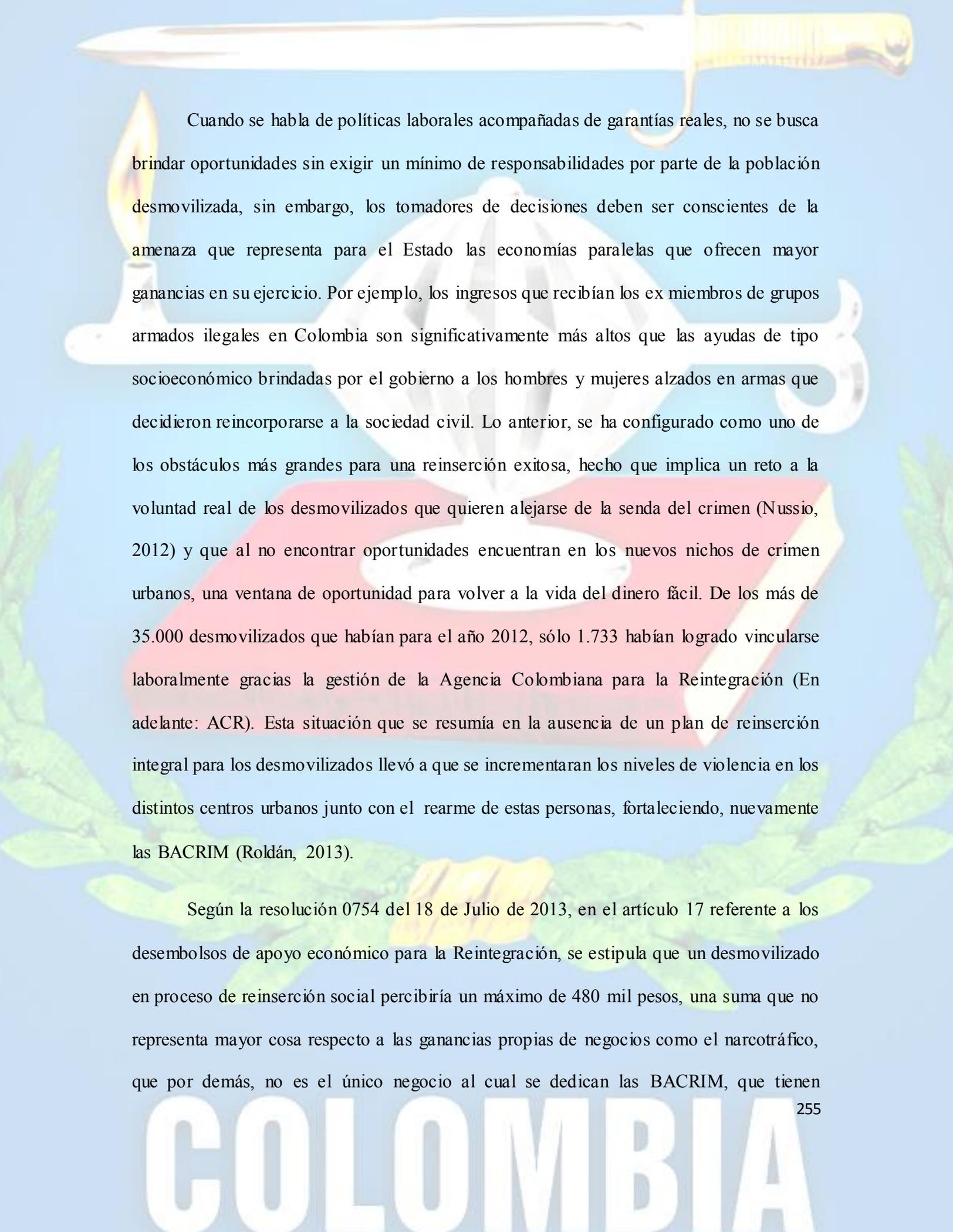
Pero han encontrado resistencia del ELN, que también quiere llegar a estas zonas.

(El País, 2017).

Teniendo en cuenta el panorama actual, se hace fundamental que el Estado tenga en cuenta esta lección aprendida, con el fin de evitar el fortalecimiento de estructuras criminales que finalmente tendrán un impacto en el accionar de estos grupos alrededor de las grandes urbes colombianas, tal como lo demostró el caso post Ley de Justicia y Paz.

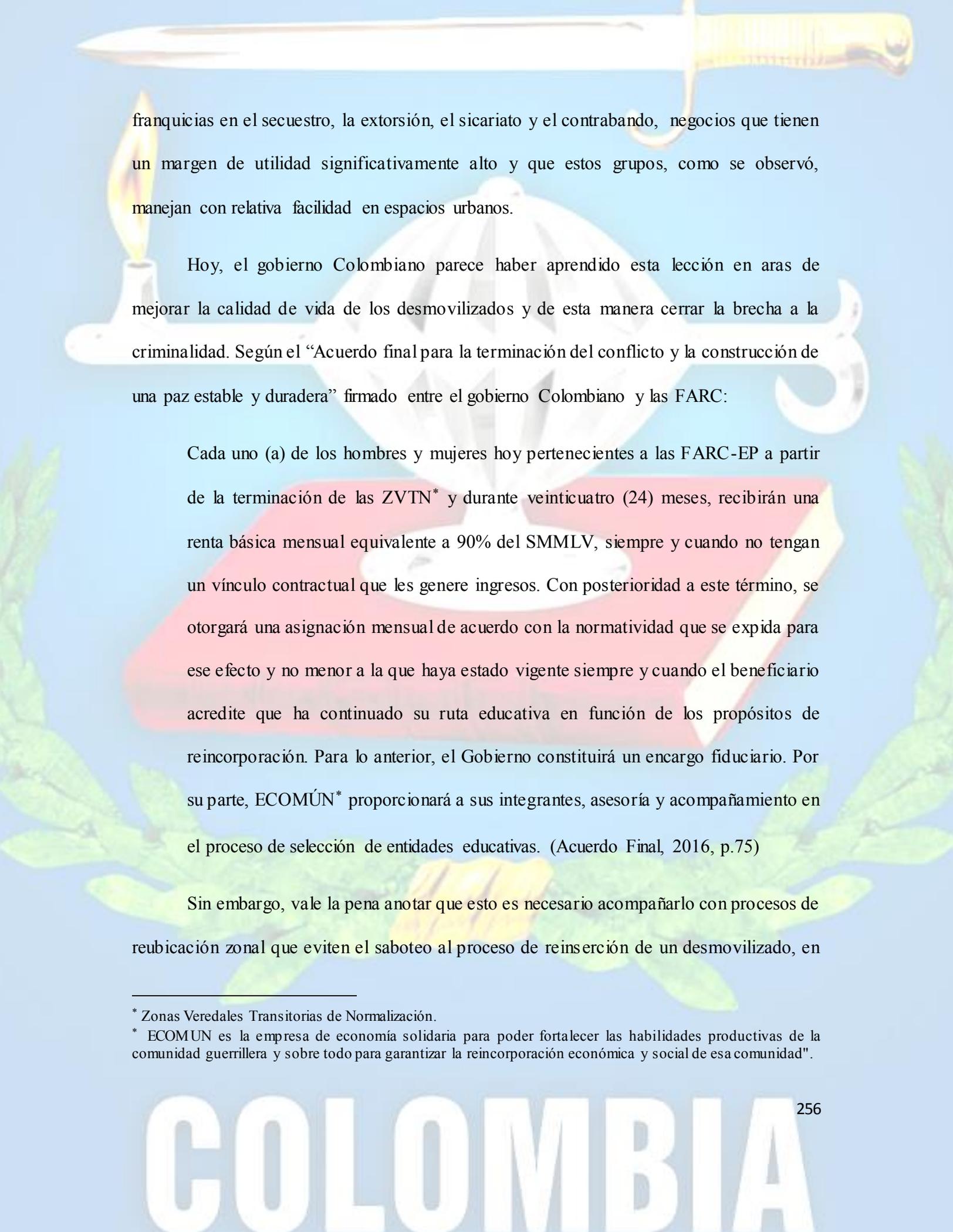
Otro de los errores identificados por el informe del CNMH fue no evitar el rearme, pues puso en riesgo tanto a la víctimas como a los desmovilizados que querían reincorporarse a la vida civil, esto, sumado a la falta de oportunidades estableció al mismo tiempo una falta garantías. Así, la población desmovilizada se encuentra en una situación altamente propensa a volver a incurrir en la criminalidad, no necesariamente por una tendencia inherente a su condición, sino a fallas estructurales del Estado a la hora de implementar estos tipos de procedimientos.

De esta manera, es claro que una estrategia contundente para contrarrestar este tipo de fenómenos en las grandes ciudades, es cerrar la puerta a las economías ilegales que se derivan del accionar de las BACRIM. Por lo anterior, una política laboral exitosa para los desmovilizados, acompañada de garantías reales para su proceso de reacomodamiento en la sociedad, es un punto fundamental para lograr el objetivo del gobierno nacional en torno a una paz estable y duradera, como lo promulgan los acuerdos para la terminación del conflicto en Colombia.



Cuando se habla de políticas laborales acompañadas de garantías reales, no se busca brindar oportunidades sin exigir un mínimo de responsabilidades por parte de la población desmovilizada, sin embargo, los tomadores de decisiones deben ser conscientes de la amenaza que representa para el Estado las economías paralelas que ofrecen mayor ganancias en su ejercicio. Por ejemplo, los ingresos que recibían los ex miembros de grupos armados ilegales en Colombia son significativamente más altos que las ayudas de tipo socioeconómico brindadas por el gobierno a los hombres y mujeres alzados en armas que decidieron reincorporarse a la sociedad civil. Lo anterior, se ha configurado como uno de los obstáculos más grandes para una reinserción exitosa, hecho que implica un reto a la voluntad real de los desmovilizados que quieren alejarse de la senda del crimen (Nussio, 2012) y que al no encontrar oportunidades encuentran en los nuevos nichos de crimen urbanos, una ventana de oportunidad para volver a la vida del dinero fácil. De los más de 35.000 desmovilizados que habían para el año 2012, sólo 1.733 habían logrado vincularse laboralmente gracias a la gestión de la Agencia Colombiana para la Reintegración (En adelante: ACR). Esta situación que se resumía en la ausencia de un plan de reinserción integral para los desmovilizados llevó a que se incrementaran los niveles de violencia en los distintos centros urbanos junto con el rearme de estas personas, fortaleciendo, nuevamente las BACRIM (Roldán, 2013).

Según la resolución 0754 del 18 de Julio de 2013, en el artículo 17 referente a los desembolsos de apoyo económico para la Reintegración, se estipula que un desmovilizado en proceso de reinserción social percibiría un máximo de 480 mil pesos, una suma que no representa mayor cosa respecto a las ganancias propias de negocios como el narcotráfico, que por demás, no es el único negocio al cual se dedican las BACRIM, que tienen



franquicias en el secuestro, la extorsión, el sicariato y el contrabando, negocios que tienen un margen de utilidad significativamente alto y que estos grupos, como se observó, manejan con relativa facilidad en espacios urbanos.

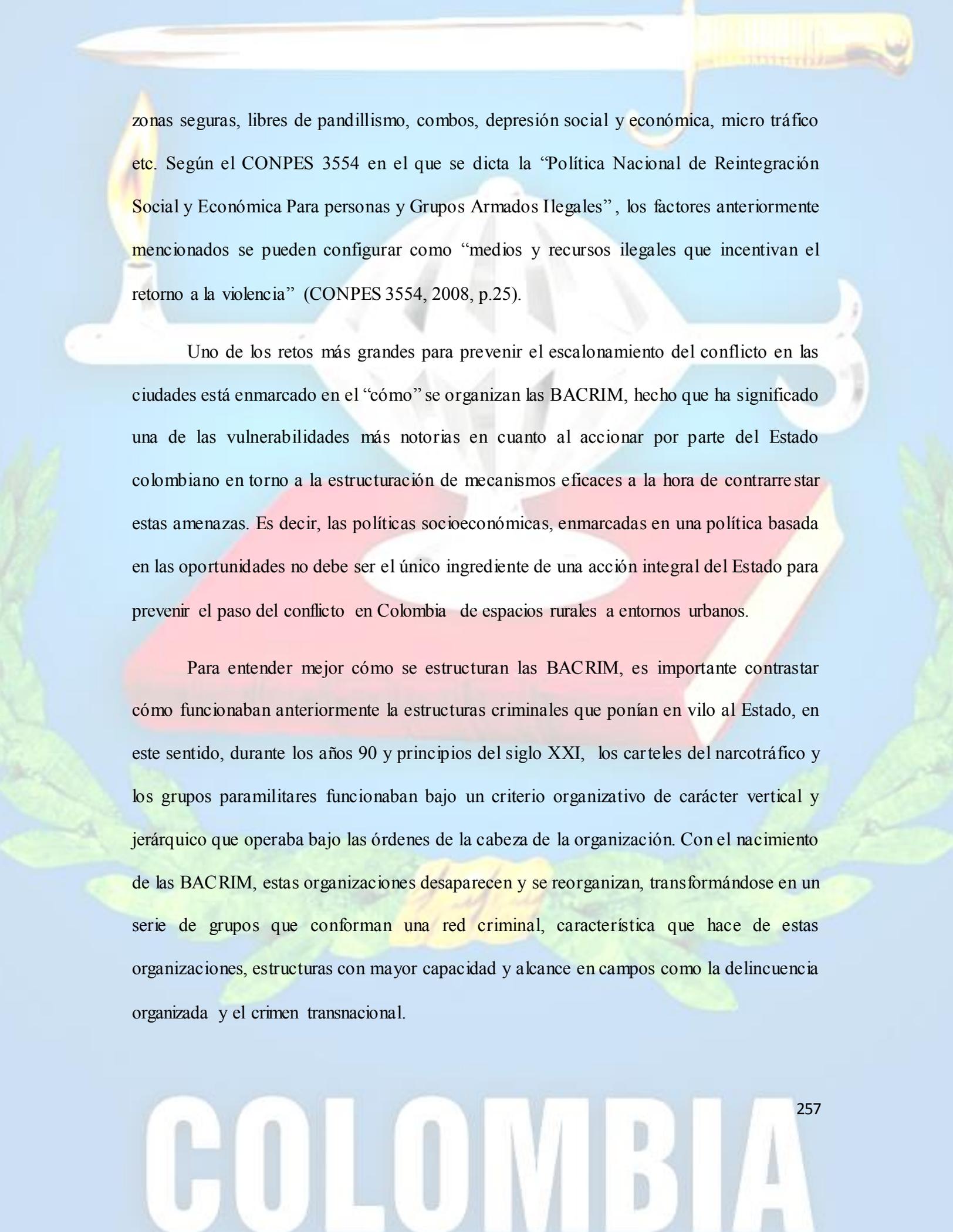
Hoy, el gobierno Colombiano parece haber aprendido esta lección en aras de mejorar la calidad de vida de los desmovilizados y de esta manera cerrar la brecha a la criminalidad. Según el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” firmado entre el gobierno Colombiano y las FARC:

Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP a partir de la terminación de las ZVTN* y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Con posterioridad a este término, se otorgará una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se expida para ese efecto y no menor a la que haya estado vigente siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación. Para lo anterior, el Gobierno constituirá un encargo fiduciario. Por su parte, ECOMÚN* proporcionará a sus integrantes, asesoría y acompañamiento en el proceso de selección de entidades educativas. (Acuerdo Final, 2016, p.75)

Sin embargo, vale la pena anotar que esto es necesario acompañarlo con procesos de reubicación zonal que eviten el sabotaje al proceso de reinscripción de un desmovilizado, en

* Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

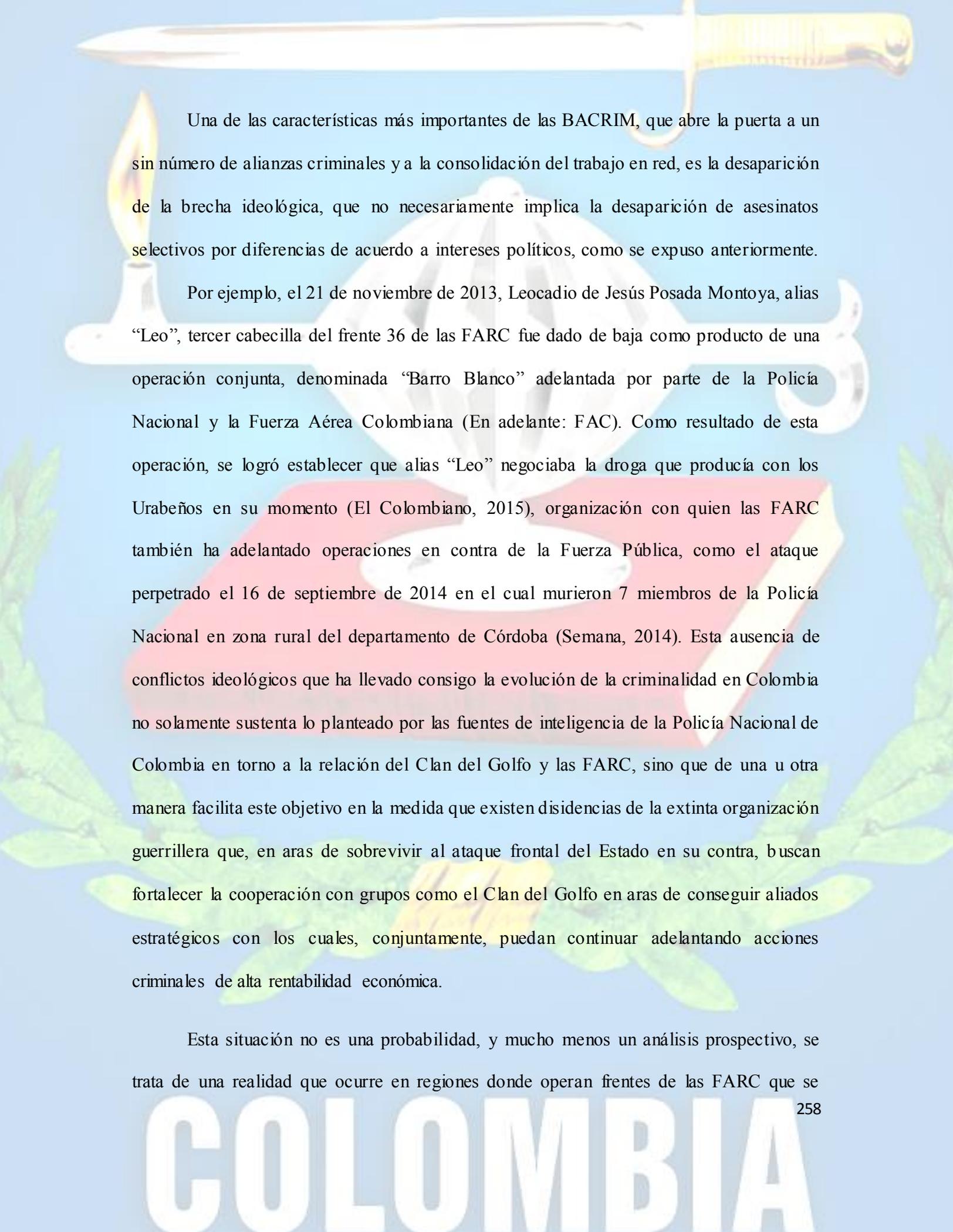
* ECOMUN es la empresa de economía solidaria para poder fortalecer las habilidades productivas de la comunidad guerrillera y sobre todo para garantizar la reincorporación económica y social de esa comunidad".



zonas seguras, libres de pandillismo, combos, depresión social y económica, micro tráfico etc. Según el CONPES 3554 en el que se dicta la “Política Nacional de Reintegración Social y Económica Para personas y Grupos Armados Ilegales”, los factores anteriormente mencionados se pueden configurar como “medios y recursos ilegales que incentivan el retorno a la violencia” (CONPES 3554, 2008, p.25).

Uno de los retos más grandes para prevenir el escalonamiento del conflicto en las ciudades está enmarcado en el “cómo” se organizan las BACRIM, hecho que ha significado una de las vulnerabilidades más notorias en cuanto al accionar por parte del Estado colombiano en torno a la estructuración de mecanismos eficaces a la hora de contrarrestar estas amenazas. Es decir, las políticas socioeconómicas, enmarcadas en una política basada en las oportunidades no debe ser el único ingrediente de una acción integral del Estado para prevenir el paso del conflicto en Colombia de espacios rurales a entornos urbanos.

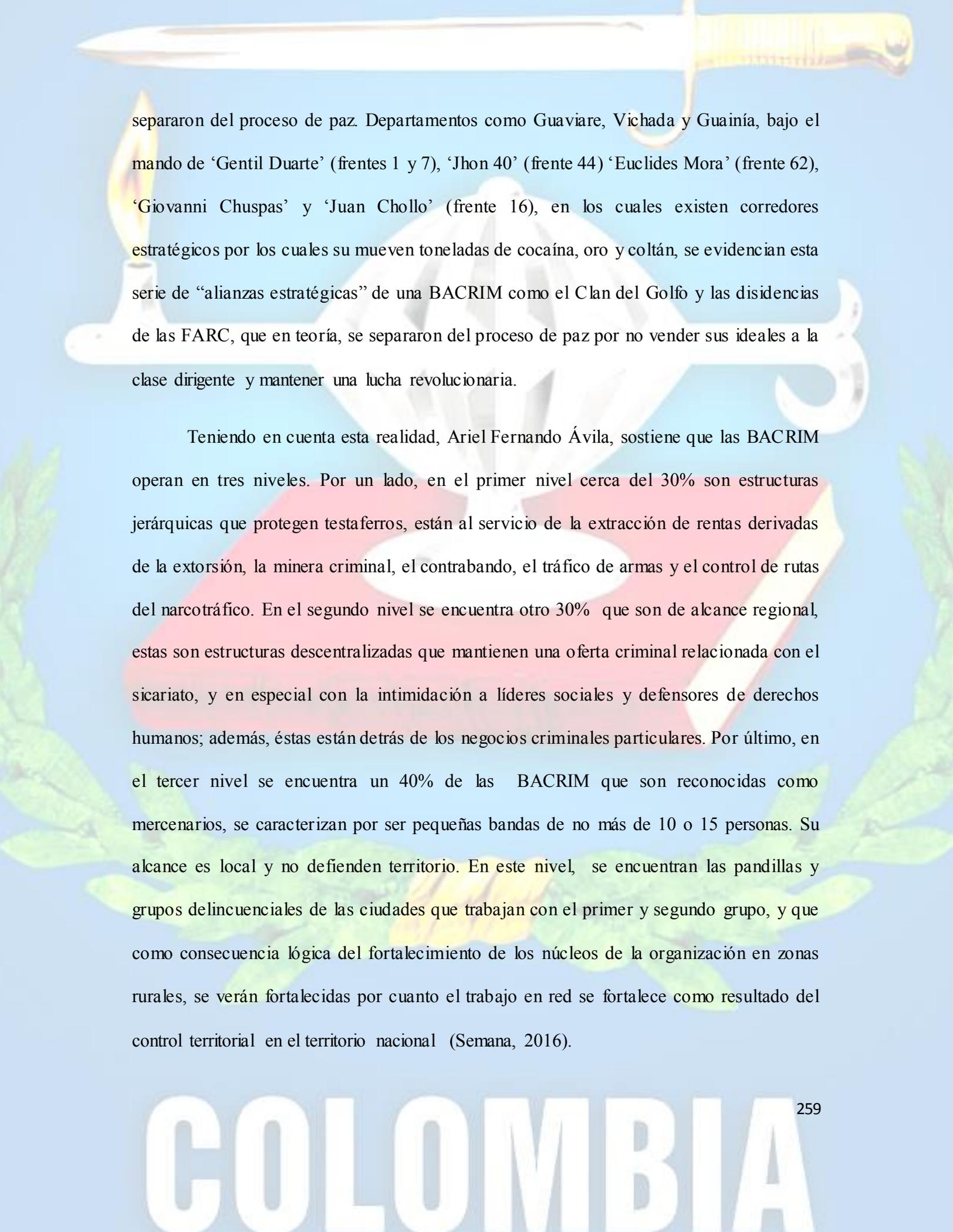
Para entender mejor cómo se estructuran las BACRIM, es importante contrastar cómo funcionaban anteriormente la estructuras criminales que ponían en vilo al Estado, en este sentido, durante los años 90 y principios del siglo XXI, los carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares funcionaban bajo un criterio organizativo de carácter vertical y jerárquico que operaba bajo las órdenes de la cabeza de la organización. Con el nacimiento de las BACRIM, estas organizaciones desaparecen y se reorganizan, transformándose en un serie de grupos que conforman una red criminal, característica que hace de estas organizaciones, estructuras con mayor capacidad y alcance en campos como la delincuencia organizada y el crimen transnacional.



Una de las características más importantes de las BACRIM, que abre la puerta a un sin número de alianzas criminales y a la consolidación del trabajo en red, es la desaparición de la brecha ideológica, que no necesariamente implica la desaparición de asesinatos selectivos por diferencias de acuerdo a intereses políticos, como se expuso anteriormente.

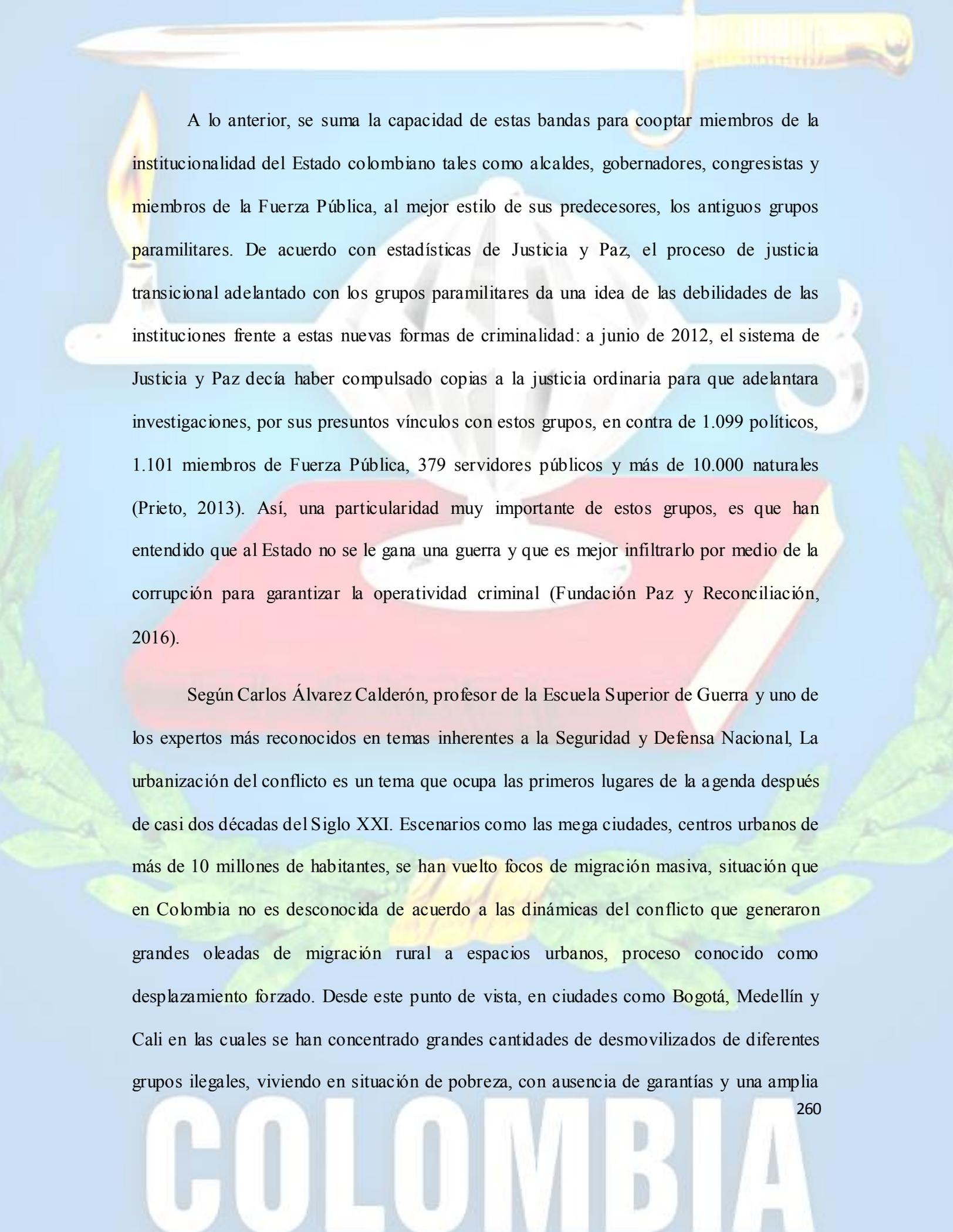
Por ejemplo, el 21 de noviembre de 2013, Leocadio de Jesús Posada Montoya, alias “Leo”, tercer cabecilla del frente 36 de las FARC fue dado de baja como producto de una operación conjunta, denominada “Barro Blanco” adelantada por parte de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana (En adelante: FAC). Como resultado de esta operación, se logró establecer que alias “Leo” negociaba la droga que producía con los Urabeños en su momento (El Colombiano, 2015), organización con quien las FARC también ha adelantado operaciones en contra de la Fuerza Pública, como el ataque perpetrado el 16 de septiembre de 2014 en el cual murieron 7 miembros de la Policía Nacional en zona rural del departamento de Córdoba (Semana, 2014). Esta ausencia de conflictos ideológicos que ha llevado consigo la evolución de la criminalidad en Colombia no solamente sustenta lo planteado por las fuentes de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia en torno a la relación del Clan del Golfo y las FARC, sino que de una u otra manera facilita este objetivo en la medida que existen disidencias de la extinta organización guerrillera que, en aras de sobrevivir al ataque frontal del Estado en su contra, buscan fortalecer la cooperación con grupos como el Clan del Golfo en aras de conseguir aliados estratégicos con los cuales, conjuntamente, puedan continuar adelantando acciones criminales de alta rentabilidad económica.

Esta situación no es una probabilidad, y mucho menos un análisis prospectivo, se trata de una realidad que ocurre en regiones donde operan frentes de las FARC que se



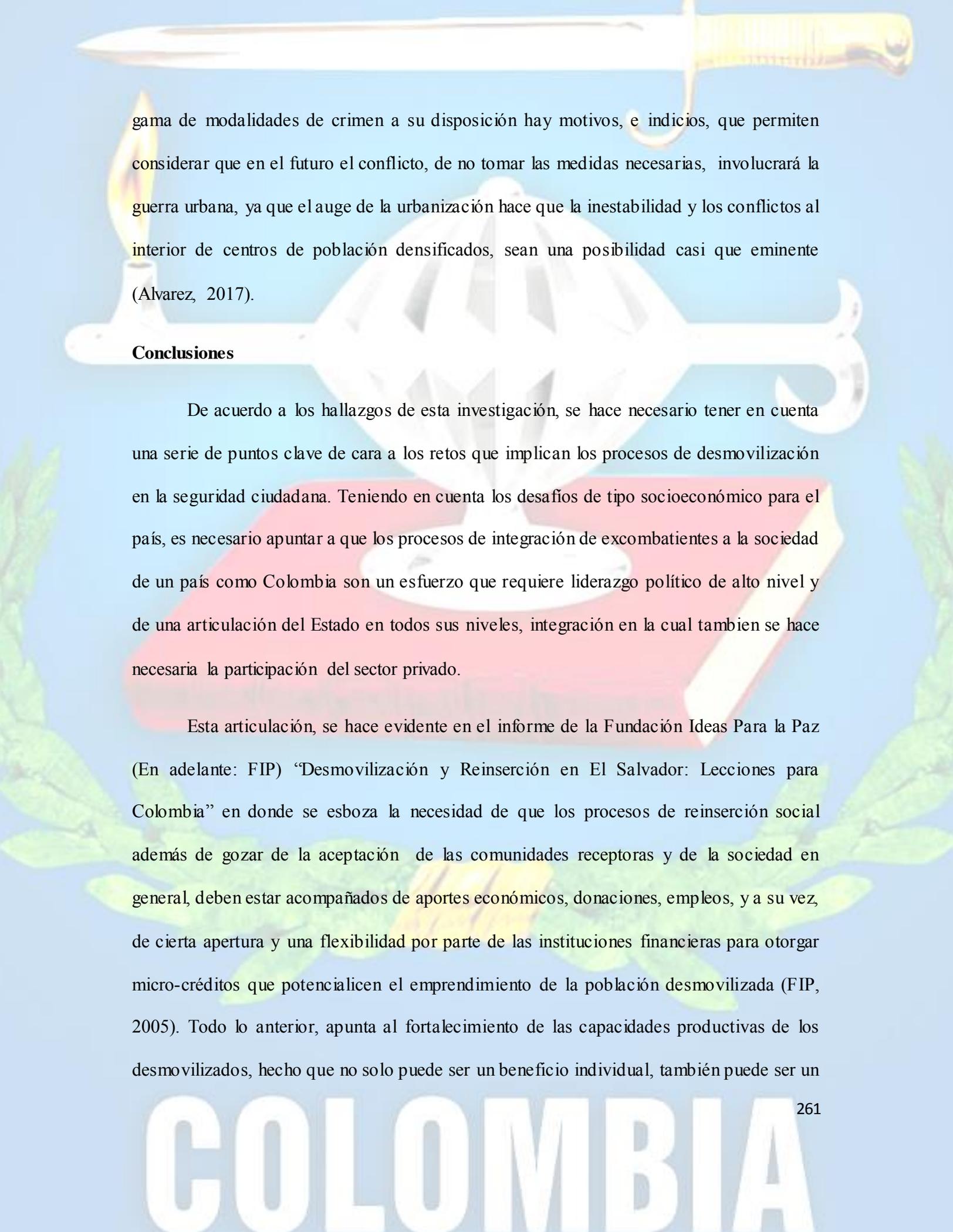
separaron del proceso de paz. Departamentos como Guaviare, Vichada y Guainía, bajo el mando de ‘Gentil Duarte’ (frentes 1 y 7), ‘Jhon 40’ (frente 44) ‘Euclides Mora’ (frente 62), ‘Giovanni Chuspas’ y ‘Juan Chollo’ (frente 16), en los cuales existen corredores estratégicos por los cuales se mueven toneladas de cocaína, oro y coltán, se evidencian esta serie de “alianzas estratégicas” de una BACRIM como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, que en teoría, se separaron del proceso de paz por no vender sus ideales a la clase dirigente y mantener una lucha revolucionaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, Ariel Fernando Ávila, sostiene que las BACRIM operan en tres niveles. Por un lado, en el primer nivel cerca del 30% son estructuras jerárquicas que protegen testaferros, están al servicio de la extracción de rentas derivadas de la extorsión, la minera criminal, el contrabando, el tráfico de armas y el control de rutas del narcotráfico. En el segundo nivel se encuentra otro 30% que son de alcance regional, estas son estructuras descentralizadas que mantienen una oferta criminal relacionada con el sicariato, y en especial con la intimidación a líderes sociales y defensores de derechos humanos; además, éstas están detrás de los negocios criminales particulares. Por último, en el tercer nivel se encuentra un 40% de las BACRIM que son reconocidas como mercenarios, se caracterizan por ser pequeñas bandas de no más de 10 o 15 personas. Su alcance es local y no defienden territorio. En este nivel, se encuentran las pandillas y grupos delincuenciales de las ciudades que trabajan con el primer y segundo grupo, y que como consecuencia lógica del fortalecimiento de los núcleos de la organización en zonas rurales, se verán fortalecidas por cuanto el trabajo en red se fortalece como resultado del control territorial en el territorio nacional (Semana, 2016).



A lo anterior, se suma la capacidad de estas bandas para cooptar miembros de la institucionalidad del Estado colombiano tales como alcaldes, gobernadores, congresistas y miembros de la Fuerza Pública, al mejor estilo de sus predecesores, los antiguos grupos paramilitares. De acuerdo con estadísticas de Justicia y Paz, el proceso de justicia transicional adelantado con los grupos paramilitares da una idea de las debilidades de las instituciones frente a estas nuevas formas de criminalidad: a junio de 2012, el sistema de Justicia y Paz decía haber compulsado copias a la justicia ordinaria para que adelantara investigaciones, por sus presuntos vínculos con estos grupos, en contra de 1.099 políticos, 1.101 miembros de Fuerza Pública, 379 servidores públicos y más de 10.000 naturales (Prieto, 2013). Así, una particularidad muy importante de estos grupos, es que han entendido que al Estado no se le gana una guerra y que es mejor infiltrarlo por medio de la corrupción para garantizar la operatividad criminal (Fundación Paz y Reconciliación, 2016).

Según Carlos Álvarez Calderón, profesor de la Escuela Superior de Guerra y uno de los expertos más reconocidos en temas inherentes a la Seguridad y Defensa Nacional, La urbanización del conflicto es un tema que ocupa los primeros lugares de la agenda después de casi dos décadas del Siglo XXI. Escenarios como las mega ciudades, centros urbanos de más de 10 millones de habitantes, se han vuelto focos de migración masiva, situación que en Colombia no es desconocida de acuerdo a las dinámicas del conflicto que generaron grandes oleadas de migración rural a espacios urbanos, proceso conocido como desplazamiento forzado. Desde este punto de vista, en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali en las cuales se han concentrado grandes cantidades de desmovilizados de diferentes grupos ilegales, viviendo en situación de pobreza, con ausencia de garantías y una amplia

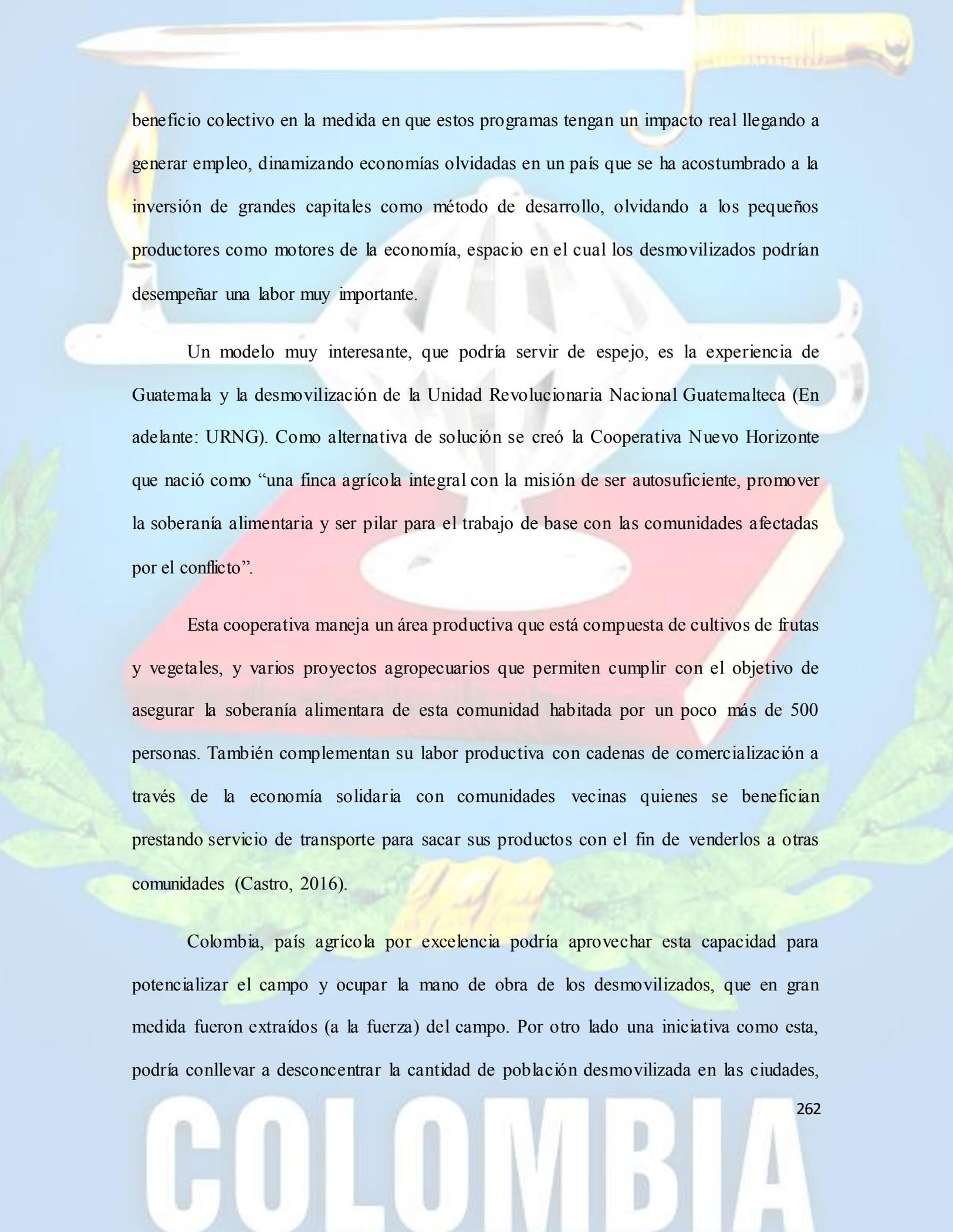


gama de modalidades de crimen a su disposición hay motivos, e indicios, que permiten considerar que en el futuro el conflicto, de no tomar las medidas necesarias, involucrará la guerra urbana, ya que el auge de la urbanización hace que la inestabilidad y los conflictos al interior de centros de población densificados, sean una posibilidad casi que eminente (Alvarez, 2017).

Conclusiones

De acuerdo a los hallazgos de esta investigación, se hace necesario tener en cuenta una serie de puntos clave de cara a los retos que implican los procesos de desmovilización en la seguridad ciudadana. Teniendo en cuenta los desafíos de tipo socioeconómico para el país, es necesario apuntar a que los procesos de integración de excombatientes a la sociedad de un país como Colombia son un esfuerzo que requiere liderazgo político de alto nivel y de una articulación del Estado en todos sus niveles, integración en la cual también se hace necesaria la participación del sector privado.

Esta articulación, se hace evidente en el informe de la Fundación Ideas Para la Paz (En adelante: FIP) “Desmovilización y Reinserción en El Salvador: Lecciones para Colombia” en donde se esboza la necesidad de que los procesos de reinserción social además de gozar de la aceptación de las comunidades receptoras y de la sociedad en general, deben estar acompañados de aportes económicos, donaciones, empleos, y a su vez, de cierta apertura y una flexibilidad por parte de las instituciones financieras para otorgar micro-créditos que potencialicen el emprendimiento de la población desmovilizada (FIP, 2005). Todo lo anterior, apunta al fortalecimiento de las capacidades productivas de los desmovilizados, hecho que no solo puede ser un beneficio individual, también puede ser un

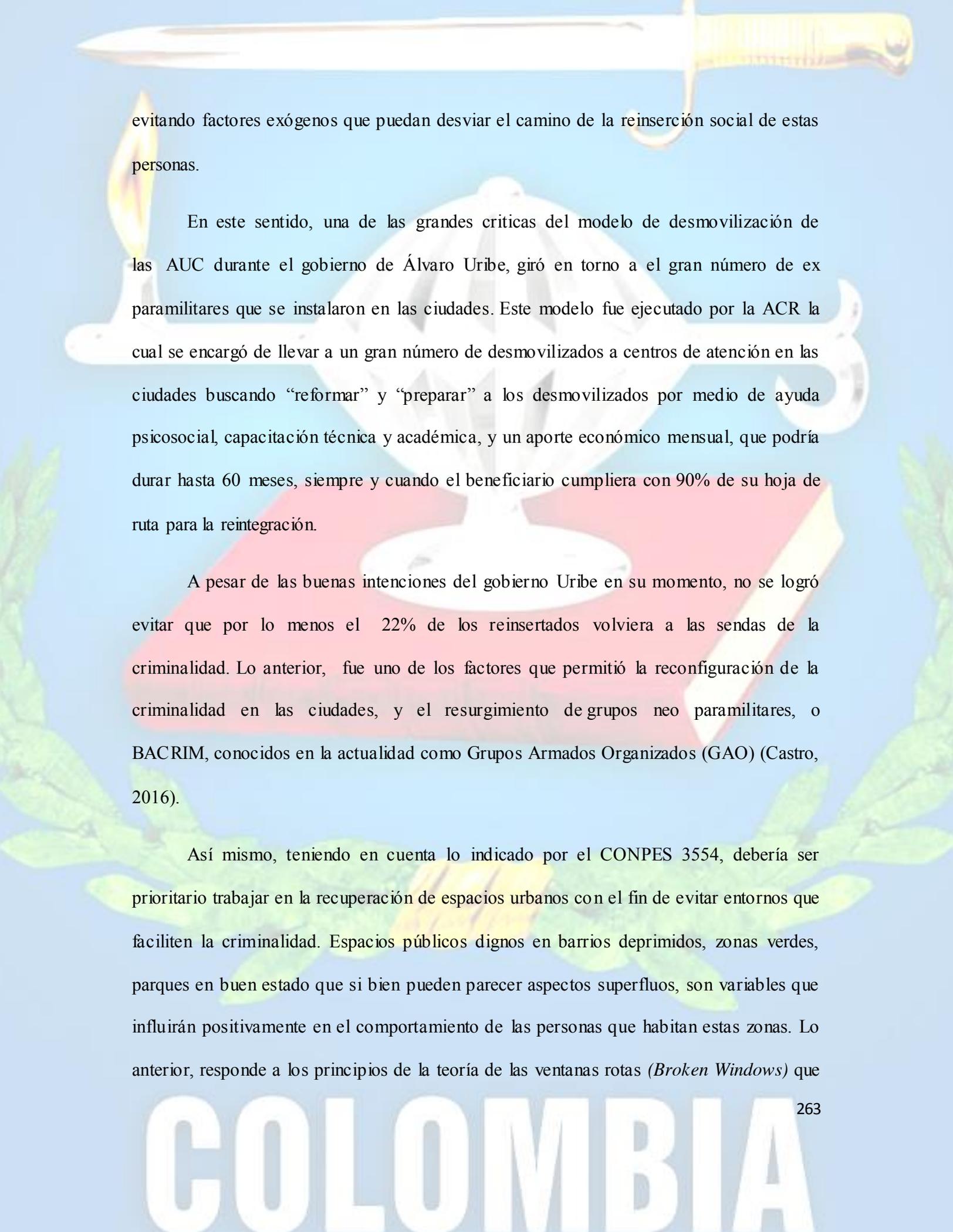


beneficio colectivo en la medida en que estos programas tengan un impacto real llegando a generar empleo, dinamizando economías olvidadas en un país que se ha acostumbrado a la inversión de grandes capitales como método de desarrollo, olvidando a los pequeños productores como motores de la economía, espacio en el cual los desmovilizados podrían desempeñar una labor muy importante.

Un modelo muy interesante, que podría servir de espejo, es la experiencia de Guatemala y la desmovilización de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (En adelante: URNG). Como alternativa de solución se creó la Cooperativa Nuevo Horizonte que nació como “una finca agrícola integral con la misión de ser autosuficiente, promover la soberanía alimentaria y ser pilar para el trabajo de base con las comunidades afectadas por el conflicto”.

Esta cooperativa maneja un área productiva que está compuesta de cultivos de frutas y vegetales, y varios proyectos agropecuarios que permiten cumplir con el objetivo de asegurar la soberanía alimentara de esta comunidad habitada por un poco más de 500 personas. También complementan su labor productiva con cadenas de comercialización a través de la economía solidaria con comunidades vecinas quienes se benefician prestando servicio de transporte para sacar sus productos con el fin de venderlos a otras comunidades (Castro, 2016).

Colombia, país agrícola por excelencia podría aprovechar esta capacidad para potencializar el campo y ocupar la mano de obra de los desmovilizados, que en gran medida fueron extraídos (a la fuerza) del campo. Por otro lado una iniciativa como esta, podría conllevar a desconcentrar la cantidad de población desmovilizada en las ciudades,

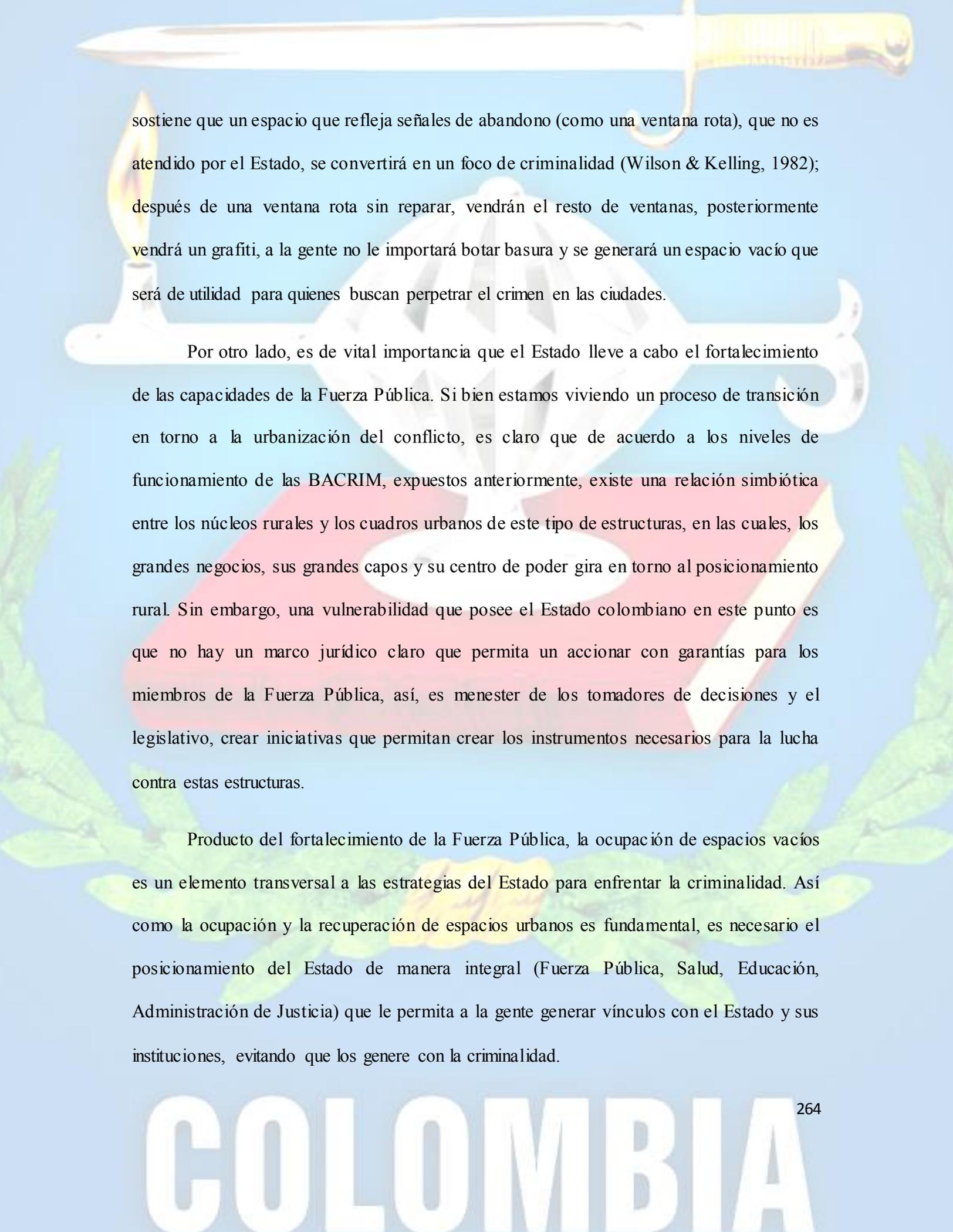


evitando factores exógenos que puedan desviar el camino de la reinserción social de estas personas.

En este sentido, una de las grandes críticas del modelo de desmovilización de las AUC durante el gobierno de Álvaro Uribe, giró en torno a el gran número de ex paramilitares que se instalaron en las ciudades. Este modelo fue ejecutado por la ACR la cual se encargó de llevar a un gran número de desmovilizados a centros de atención en las ciudades buscando “reformular” y “preparar” a los desmovilizados por medio de ayuda psicosocial, capacitación técnica y académica, y un aporte económico mensual, que podría durar hasta 60 meses, siempre y cuando el beneficiario cumpliera con 90% de su hoja de ruta para la reintegración.

A pesar de las buenas intenciones del gobierno Uribe en su momento, no se logró evitar que por lo menos el 22% de los reinsertados volviera a las sendas de la criminalidad. Lo anterior, fue uno de los factores que permitió la reconfiguración de la criminalidad en las ciudades, y el resurgimiento de grupos neo paramilitares, o BACRIM, conocidos en la actualidad como Grupos Armados Organizados (GAO) (Castro, 2016).

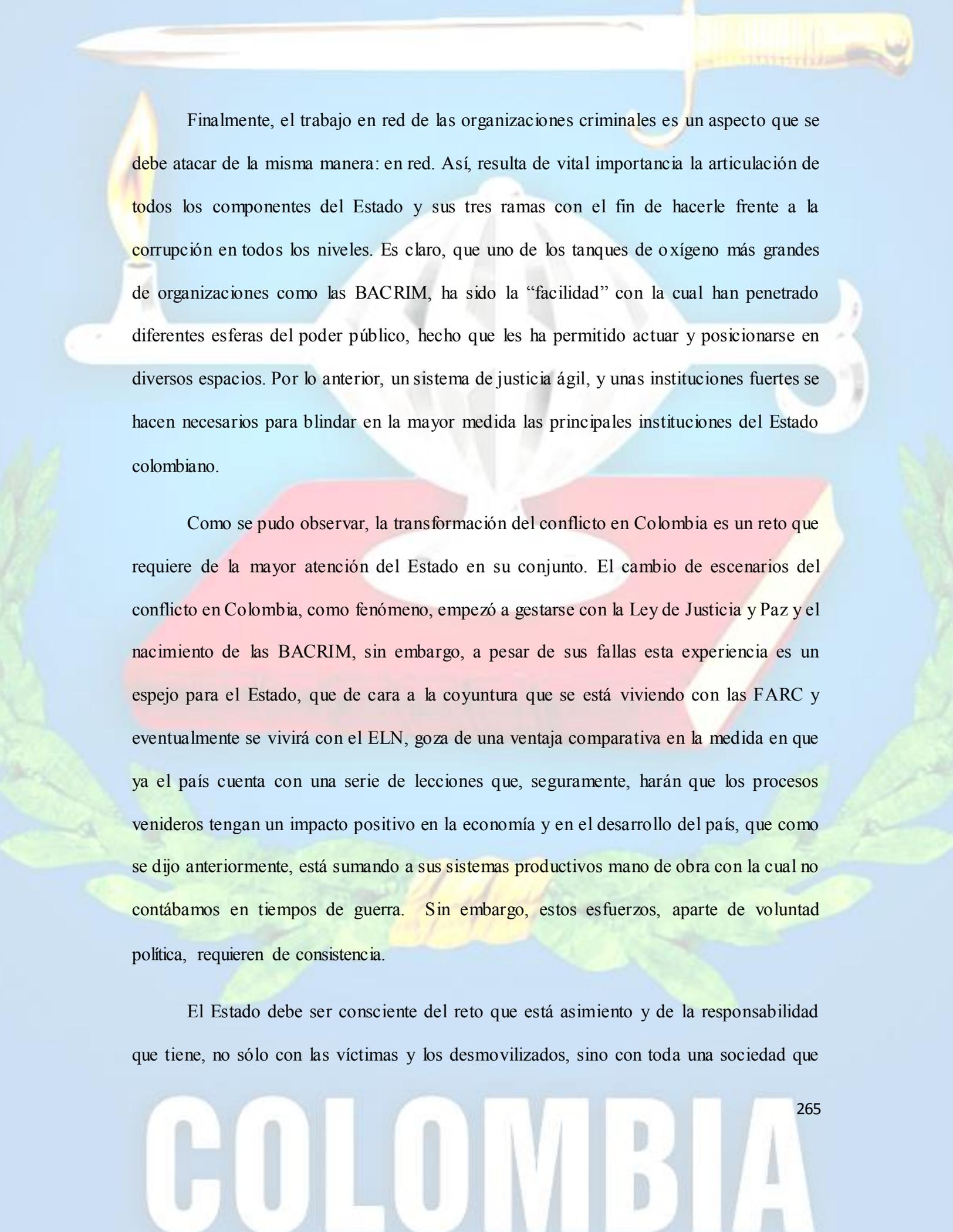
Así mismo, teniendo en cuenta lo indicado por el CONPES 3554, debería ser prioritario trabajar en la recuperación de espacios urbanos con el fin de evitar entornos que faciliten la criminalidad. Espacios públicos dignos en barrios deprimidos, zonas verdes, parques en buen estado que si bien pueden parecer aspectos superfluos, son variables que influirán positivamente en el comportamiento de las personas que habitan estas zonas. Lo anterior, responde a los principios de la teoría de las ventanas rotas (*Broken Windows*) que



sostiene que un espacio que refleja señales de abandono (como una ventana rota), que no es atendido por el Estado, se convertirá en un foco de criminalidad (Wilson & Kelling, 1982); después de una ventana rota sin reparar, vendrán el resto de ventanas, posteriormente vendrá un grafiti, a la gente no le importará botar basura y se generará un espacio vacío que será de utilidad para quienes buscan perpetrar el crimen en las ciudades.

Por otro lado, es de vital importancia que el Estado lleve a cabo el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública. Si bien estamos viviendo un proceso de transición en torno a la urbanización del conflicto, es claro que de acuerdo a los niveles de funcionamiento de las BACRIM, expuestos anteriormente, existe una relación simbiótica entre los núcleos rurales y los cuadros urbanos de este tipo de estructuras, en las cuales, los grandes negocios, sus grandes capos y su centro de poder gira en torno al posicionamiento rural. Sin embargo, una vulnerabilidad que posee el Estado colombiano en este punto es que no hay un marco jurídico claro que permita un accionar con garantías para los miembros de la Fuerza Pública, así, es menester de los tomadores de decisiones y el legislativo, crear iniciativas que permitan crear los instrumentos necesarios para la lucha contra estas estructuras.

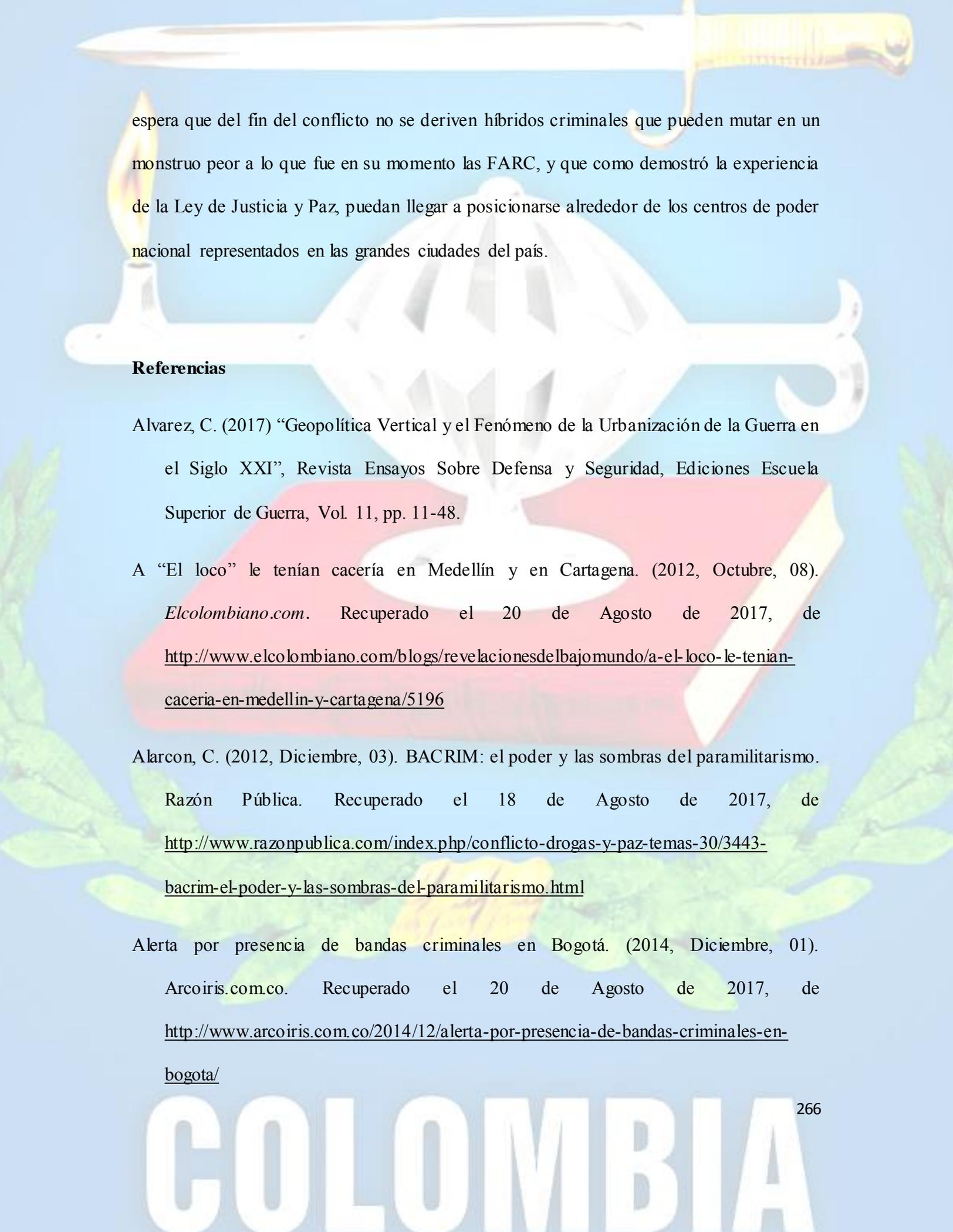
Producto del fortalecimiento de la Fuerza Pública, la ocupación de espacios vacíos es un elemento transversal a las estrategias del Estado para enfrentar la criminalidad. Así como la ocupación y la recuperación de espacios urbanos es fundamental, es necesario el posicionamiento del Estado de manera integral (Fuerza Pública, Salud, Educación, Administración de Justicia) que le permita a la gente generar vínculos con el Estado y sus instituciones, evitando que los genere con la criminalidad.



Finalmente, el trabajo en red de las organizaciones criminales es un aspecto que se debe atacar de la misma manera: en red. Así, resulta de vital importancia la articulación de todos los componentes del Estado y sus tres ramas con el fin de hacerle frente a la corrupción en todos los niveles. Es claro, que uno de los tanques de oxígeno más grandes de organizaciones como las BACRIM, ha sido la “facilidad” con la cual han penetrado diferentes esferas del poder público, hecho que les ha permitido actuar y posicionarse en diversos espacios. Por lo anterior, un sistema de justicia ágil, y unas instituciones fuertes se hacen necesarios para blindar en la mayor medida las principales instituciones del Estado colombiano.

Como se pudo observar, la transformación del conflicto en Colombia es un reto que requiere de la mayor atención del Estado en su conjunto. El cambio de escenarios del conflicto en Colombia, como fenómeno, empezó a gestarse con la Ley de Justicia y Paz y el nacimiento de las BACRIM, sin embargo, a pesar de sus fallas esta experiencia es un espejo para el Estado, que de cara a la coyuntura que se está viviendo con las FARC y eventualmente se vivirá con el ELN, goza de una ventaja comparativa en la medida en que ya el país cuenta con una serie de lecciones que, seguramente, harán que los procesos venideros tengan un impacto positivo en la economía y en el desarrollo del país, que como se dijo anteriormente, está sumando a sus sistemas productivos mano de obra con la cual no contábamos en tiempos de guerra. Sin embargo, estos esfuerzos, aparte de voluntad política, requieren de consistencia.

El Estado debe ser consciente del reto que está asumiendo y de la responsabilidad que tiene, no sólo con las víctimas y los desmovilizados, sino con toda una sociedad que



espera que del fin del conflicto no se deriven híbridos criminales que pueden mutar en un monstruo peor a lo que fue en su momento las FARC, y que como demostró la experiencia de la Ley de Justicia y Paz, puedan llegar a posicionarse alrededor de los centros de poder nacional representados en las grandes ciudades del país.

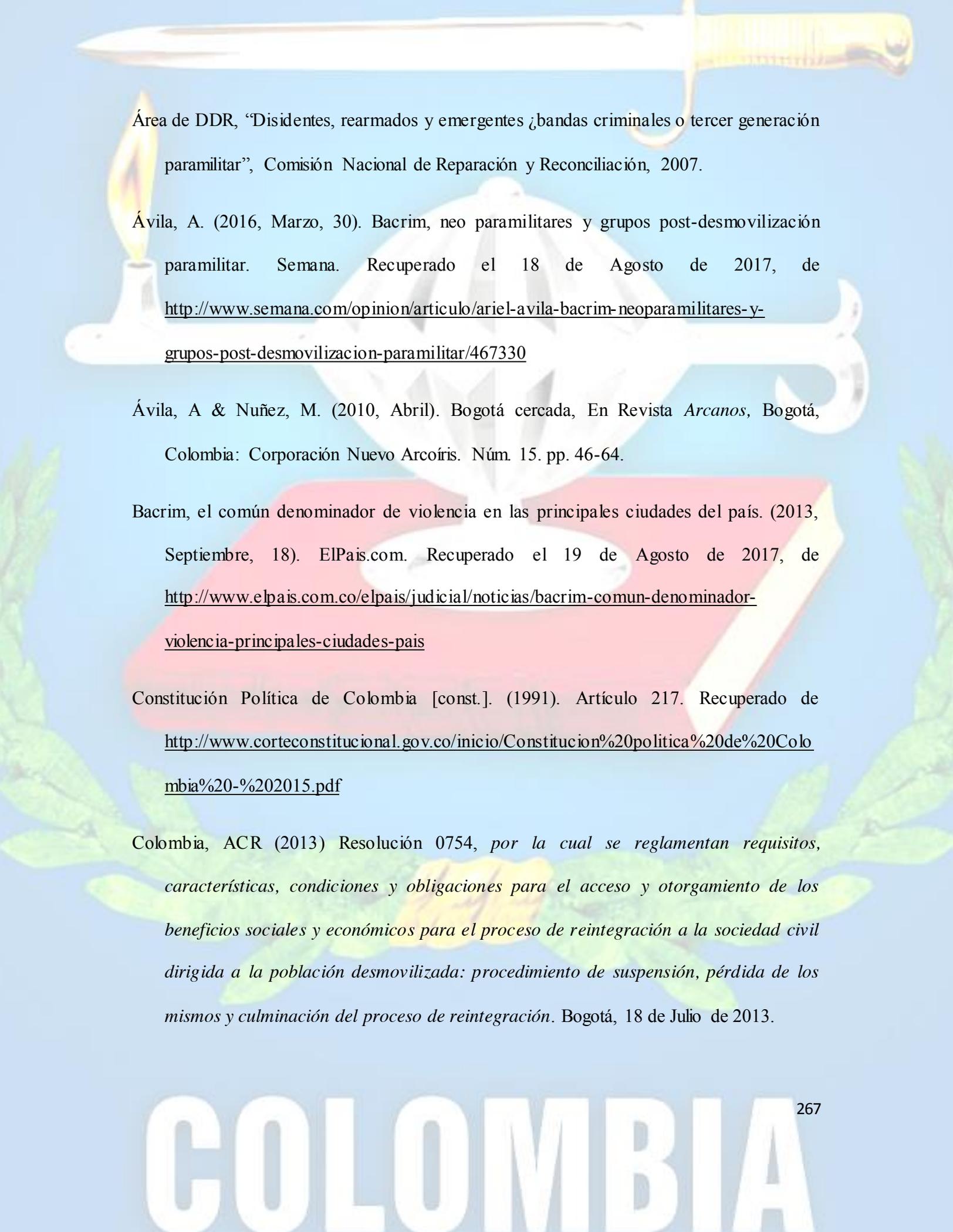
Referencias

Alvarez, C. (2017) “Geopolítica Vertical y el Fenómeno de la Urbanización de la Guerra en el Siglo XXI”, Revista Ensayos Sobre Defensa y Seguridad, Ediciones Escuela Superior de Guerra, Vol. 11, pp. 11-48.

A “El loco” le tenían cacería en Medellín y en Cartagena. (2012, Octubre, 08). *Elcolombiano.com*. Recuperado el 20 de Agosto de 2017, de <http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/a-el-loco-le-tenian-caceria-en-medellin-y-cartagena/5196>

Alarcon, C. (2012, Diciembre, 03). BACRIM: el poder y las sombras del paramilitarismo. Razón Pública. Recuperado el 18 de Agosto de 2017, de <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3443-bacrim-el-poder-y-las-sombras-del-paramilitarismo.html>

Alerta por presencia de bandas criminales en Bogotá. (2014, Diciembre, 01). *Arcoiris.com.co*. Recuperado el 20 de Agosto de 2017, de <http://www.arcoiris.com.co/2014/12/alerta-por-presencia-de-bandas-criminales-en-bogota/>



Área de DDR, “Disidentes, rearmados y emergentes ¿bandas criminales o tercer generación paramilitar”, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007.

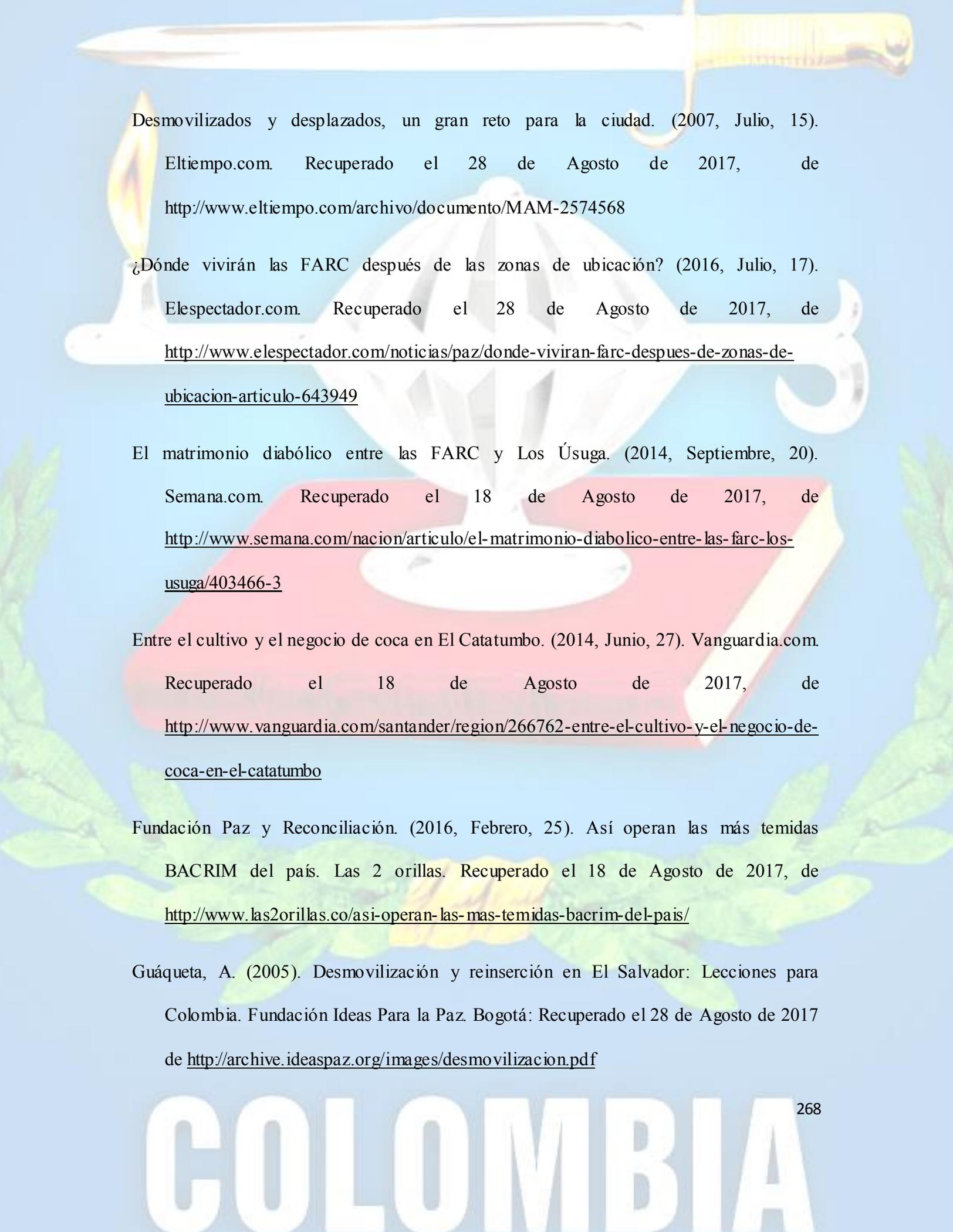
Ávila, A. (2016, Marzo, 30). Bacrim, neo paramilitares y grupos post-desmovilización paramilitar. *Semana*. Recuperado el 18 de Agosto de 2017, de <http://www.semana.com/opinion/articulo/ariel-avila-bacrim-neoparamilitares-y-grupos-post-desmovilizacion-paramilitar/467330>

Ávila, A & Nuñez, M. (2010, Abril). Bogotá cercada, En *Revista Arcanos*, Bogotá, Colombia: Corporación Nuevo Arcoíris. Núm. 15. pp. 46-64.

Bacrim, el común denominador de violencia en las principales ciudades del país. (2013, Septiembre, 18). *ElPais.com*. Recuperado el 19 de Agosto de 2017, de <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/bacrim-comun-denominador-violencia-principales-ciudades-pais>

Constitución Política de Colombia [const.]. (1991). Artículo 217. Recuperado de <http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf>

Colombia, ACR (2013) Resolución 0754, *por la cual se reglamentan requisitos, características, condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales y económicos para el proceso de reintegración a la sociedad civil dirigida a la población desmovilizada: procedimiento de suspensión, pérdida de los mismos y culminación del proceso de reintegración*. Bogotá, 18 de Julio de 2013.



Desmovilizados y desplazados, un gran reto para la ciudad. (2007, Julio, 15).

Eltiempo.com. Recuperado el 28 de Agosto de 2017, de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2574568>

¿Dónde vivirán las FARC después de las zonas de ubicación? (2016, Julio, 17).

Elespectador.com. Recuperado el 28 de Agosto de 2017, de <http://www.elespectador.com/noticias/paz/donde-viviran-farc-despues-de-zonas-de-ubicacion-articulo-643949>

El matrimonio diabólico entre las FARC y Los Úsuga. (2014, Septiembre, 20).

Semana.com. Recuperado el 18 de Agosto de 2017, de <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-matrimonio-diabolico-entre-las-farc-los-usuga/403466-3>

Entre el cultivo y el negocio de coca en El Catatumbo. (2014, Junio, 27). Vanguardia.com.

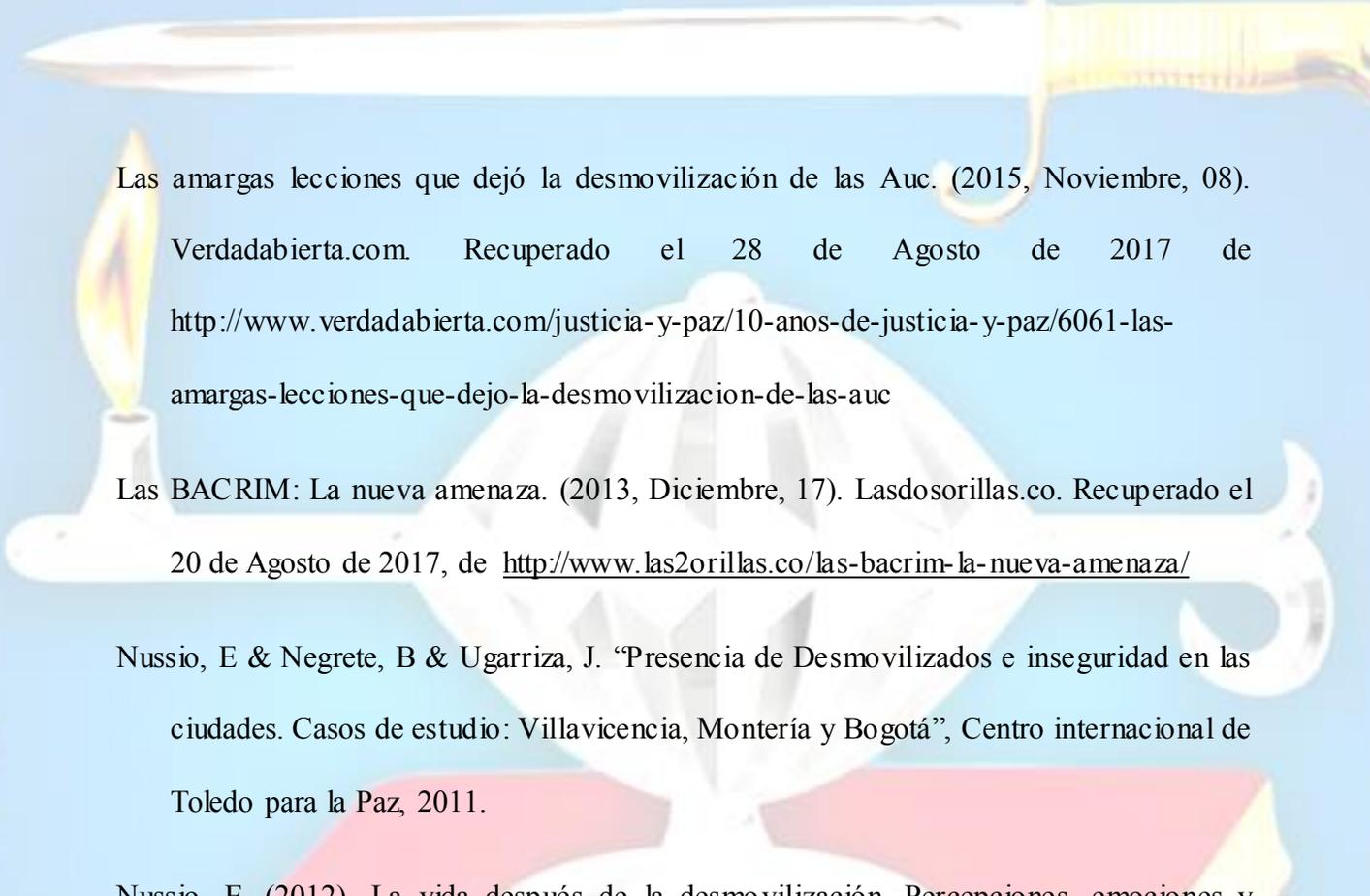
Recuperado el 18 de Agosto de 2017, de <http://www.vanguardia.com/santander/region/266762-entre-el-cultivo-y-el-negocio-de-coca-en-el-catatumbo>

Fundación Paz y Reconciliación. (2016, Febrero, 25). Así operan las más temidas

BACRIM del país. Las 2 orillas. Recuperado el 18 de Agosto de 2017, de <http://www.las2orillas.co/asi-operan-las-mas-temidas-bacrim-del-pais/>

Guáqueta, A. (2005). Desmovilización y reinserción en El Salvador: Lecciones para

Colombia. Fundación Ideas Para la Paz. Bogotá: Recuperado el 28 de Agosto de 2017 de <http://archive.ideaspaz.org/images/desmovilizacion.pdf>



Las amargas lecciones que dejó la desmovilización de las Auc. (2015, Noviembre, 08). Verdadabierta.com. Recuperado el 28 de Agosto de 2017 de <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/10-anos-de-justicia-y-paz/6061-las-amargas-lecciones-que-dejo-la-desmovilizacion-de-las-auc>

Las BACRIM: La nueva amenaza. (2013, Diciembre, 17). Lasdosorillas.co. Recuperado el 20 de Agosto de 2017, de <http://www.las2orillas.co/las-bacrim-la-nueva-amenaza/>

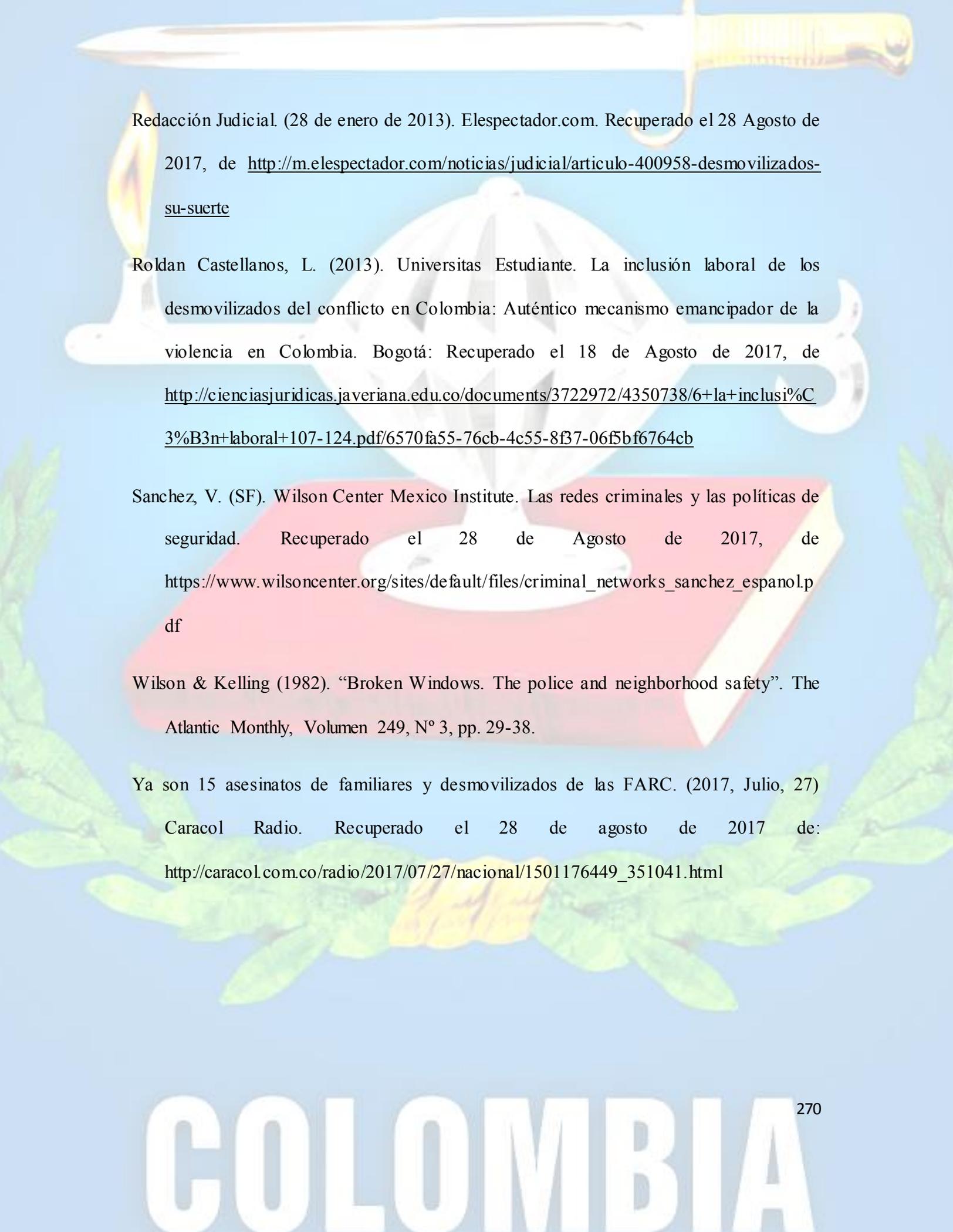
Nussio, E & Negrete, B & Ugarriza, J. “Presencia de Desmovilizados e inseguridad en las ciudades. Casos de estudio: Villavicencia, Montería y Bogotá”, Centro internacional de Toledo para la Paz, 2011.

Nussio, E. (2012). La vida después de la desmovilización. Percepciones, emociones y estrategias de exparamilitares en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.

Ocupar las zonas de las Farc, objetivo de las 'bacrim' detrás del 'plan pistola'. (2017, Mayo, 21). Elpais.com.co. Recuperado el 28 de Agosto de 2017 de <http://www.elpais.com.co/judicial/ocupar-las-zonas-de-las-farc-objetivo-de-las-bacrim-detras-del-plan-pistola.html>

ONU denuncia oleada de amenazas contra defensores de Derechos Humanos en Colombia (2012, Marzo, 07) Elmundo.com. Recuperado el 20 de Agosto de 2017, de http://www.elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?id=194160&

Prieto, A, “las Bacrim y el Crimen Organizado en ‘Colombia’”, Friedrih Ebert Stifgtun, Paper 47, 2013.



Redacción Judicial. (28 de enero de 2013). *Elespectador.com*. Recuperado el 28 Agosto de 2017, de <http://m.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-400958-desmovilizados-su-suerte>

Roldan Castellanos, L. (2013). *Universitas Estudiante*. La inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto en Colombia: Auténtico mecanismo emancipador de la violencia en Colombia. Bogotá: Recuperado el 18 de Agosto de 2017, de <http://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/4350738/6+la+inclusi%C3%B3n+laboral+107-124.pdf/6570fa55-76cb-4c55-8f37-06f5bf6764cb>

Sanchez, V. (SF). Wilson Center Mexico Institute. Las redes criminales y las políticas de seguridad. Recuperado el 28 de Agosto de 2017, de https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/criminal_networks_sanchez_espanol.pdf

Wilson & Kelling (1982). “Broken Windows. The police and neighborhood safety”. *The Atlantic Monthly*, Volumen 249, N° 3, pp. 29-38.

Ya son 15 asesinatos de familiares y desmovilizados de las FARC. (2017, Julio, 27) *Caracol Radio*. Recuperado el 28 de agosto de 2017 de: http://caracol.com.co/radio/2017/07/27/nacional/1501176449_351041.html